

INFORME SEMESTRAL DE COYUNTURA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

2024

10 años
nodal



INDICE

INFORME SEMESTRAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

- 03** INTRODUCCIÓN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO CAMPO DE BATALLA GEOPOLÍTICO Y SOCIAL, A LA LUZ DE LA FASE DIGITAL DEL CAPITALISMO
- 12** AMÉRICA LATINA PARA ARMAR: MAPA ELECTORAL DE LA REGIÓN
- 30** CALLES Y TERRITORIO VIRTUAL. UN ESCENARIO EN DISPUTA
- 52** LA UNIDAD REGIONAL EN LA ENCRUCIJADA: LA RESISTENCIA DE MÉXICO, BRASIL Y COLOMBIA
- 73** ESTADO POLICÍACO PARA EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS
- 83** AMÉRICA LATINA EN EL CENTRO DE LA DISPUTA POR LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS
- 91** LAWFARE EN AMÉRICA LATINA: EL ARMA POLÍTICA DEL SIGLO XXI
- 99** EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y LGBTTIQANB+ OCUPA LAS CALLES POR MÁS DERECHOS Y MENOS DERECHAS
- 107** CRISIS CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA: UNA CARRERA A CONTRARRELOJ
- 113** ESCLAVOS DEL TRABAJO: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA
- 120** COLONIALISMO DE NUEVA FASE. LOS DESAFÍOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN AMÉRICA LATINA

The background of the slide features a hand holding a smartphone. Overlaid on the phone is a semi-transparent globe with white lines representing latitude and longitude. A search bar is positioned horizontally across the middle of the globe, containing the text 'http://www.' and a magnifying glass icon. The entire scene is set against a dark blue background with faint, glowing binary code (0s and 1s) scattered throughout.

INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe como campo de batalla geopolítico y social, a la luz de la fase digital del capitalismo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO CAMPO DE BATALLA GEOPOLÍTICO Y SOCIAL A LA LUZ DE LA FASE DIGITAL DEL CAPITALISMO

El presente informe de análisis recupera los principales hechos y conflictos del ámbito latinoamericano y caribeño ocurridos los primeros seis meses del año 2024, leídos a la luz del cambio de fase del sistema mundo capitalista, y las múltiples disputas económicas, geopolíticas y militares que se expresan en la superficie, trastocando las relaciones sociales en su conjunto.

Esta fase digital del capitalismo ha parido una nueva personificación social: la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica apátrida. Son los mismos aristócratas quienes ya no se circunscriben a financiar partidos políticos y redes de ONG's, sino que abiertamente negocian en primera persona las cláusulas para realizar inversiones, explotar recursos fundamentales para la transición energética y trabajo a bajo costo, para incorporar la región a las cadenas globales de valor en una posición de proveedores de materias primas. Son los mismos aristócratas que disponen sus medios para organizar las bases de los proyectos de derechas, por medio del control de las tecnologías de la información y la comunicación, entre ellas internet y las redes sociales.

El escenario general se caracteriza por el enfrentamiento total entre los proyectos estratégicos financieros y tecnológicos-digitales comandados por Estados Unidos y China, denominado G2, "como representación de dos fuerzas que, para hacer más inteligible a la comprensión, definimos como China-Huawei-BATX, de un lado, y Estados Unidos-GAFAM, del otro. Aunque en ocasiones ambas fuerzas se visibilizan en los Estados, su capacidad de influencia y conducción trasciende la territorialidad y la institucionalidad de éstos".



 Bai du 百度 Alphabet Alibaba Group
阿里巴巴集团 Tencent 腾讯 facebook amazon Xiaomi Microsoft

China avanza firme mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta (de la seda del S.XXI con su plan digital) y los múltiples acuerdos binacionales de inversión y cooperación sino-latinoamericana, en sectores clave de la economía. Energía, infraestructura, alimentos, tecnología, están sobre la mesa de negociación, en su estrategia de cooperación ganar-ganar. Estados Unidos ejerce control sobre las deudas externas de la región, a través del FMI y los grandes fondos financieros de inversión global y reafirma sus Tratados de Libre Comercio, mientras opera a través del Comando Sur del Ejército, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la red de ONGs y Fundaciones instaladas en el territorio.

El poder angloamericano defiende su relativa hegemonía en la región desplegando el Comando Sur, el control del dólar y de los eslabones estratégicos en las cadenas globales de valor, además de la explotación de recursos naturales a bajo costo. La dependencia estructural se explica también por las crisis de deuda externa que arrastran las economías de la región. Según la CEPAL, al 2023, los que tienen más altos niveles de deuda pública como proporción del PIB son: Argentina, (85,4%), Brasil (73%), Panamá (59,4%), Costa Rica (58,2%) y Colombia (51,7%).

Fiel a su doctrina de Seguridad Nacional de Nuevas Amenazas, Estados Unidos invierte millones de dólares al año en incidir en los problemas que más le preocupan para el control territorial de la región: el narcotráfico y la migración. Y lo hace mediante la amplificación de la definición del terrorismo. Así proliferan las listas creadas por el Departamento de Estado norteamericano, ya no sólo con funcionarios y dirigentes de izquierdas o progresistas, sino con bandas criminales en una y otra patria chica, a fin de justificar sus intervenciones militares y diplomáticas con la conformidad de algunos de los gobiernos locales subordinados.

Por otro lado, y en alianza con Estados Unidos, Israel es hoy una de las terminales políticas de gobiernos latinoamericanos de la ultraderecha. Elementos sionistas emergen en los entramados institucionales de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay, así como en las fuerzas sociales y políticas que sostienen los proyectos del bolsonarismo en Brasil y del pinochetismo “democrático” en Chile.

Se expanden y coordinan supranacionalmente modelos sociales en los que la seguridad, la vigilancia y el control operan para contener la protesta social y restaurar el orden allí donde el achicamiento del Estado abrió paso a la violencia que engendran los altos niveles de desigualdad. La militarización de la sociedad civil y la criminalización de la protesta, trazan con claridad un camino a la reorganización de cuerpos disciplinados y dóciles, ajustándolos a las normas de una nueva fase de los procesos de producción de valor, a nivel mundial. Constituyen, además, las bases para la tecnologización de las existencias individuales y la conformación de subjetividades atomizadas, adictas y sin capacidad de reflexión.



El poder corporativo se impone sobre el estatal que no logra responder, hace ya décadas de neoliberalismo, a las demandas de los sectores populares y mucho menos aún, a las exigencias de este tiempo en el que los mercados laborales se contraen a la par del crecimiento de las catástrofes ambientales, sanitarias y sociales.

Al observar el campo del trabajo, salta a la luz que la baja productividad y la mala calidad del empleo tienen diversas consecuencias para las y los trabajadores, entre ellas: los bajos salarios y la falta de seguridad social, lo que los deja más vulnerables aún, ante enfermedades, accidentes laborales y la vejez; y finalmente, trae aparejada escasas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, perpetuando el ciclo de baja productividad.

El último informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) informa que el empresario mexicano Carlos Slim, con inversiones en empresas de telecomunicaciones, mineras, financieras, entre otros negocios, es el hombre más rico de Latinoamérica. En conjunto con Germán Larrea, dueño de minas por medio de Grupo México, empresas petroleras, trenes, cines, constructoras y centros comerciales, poseen más riqueza que la mitad de todos los pobres de Latinoamérica. He aquí, dos aristócratas financieros tecnológicos de origen mexicano e influencia regional.



Carlos Slim y German Larrea

Los verdaderos “dueños del mundo”, el pequeño sector que concentra la riqueza global se esconde detrás de discursos e imaginarios sociales que circulan en las redes y en las plataformas: quien se esfuerce y trabaje duro, siendo su propio jefe, tendrá su recompensa y prestigio social. Pero en ese mundo meritocrático y “self-made” o autogestivo, está claro, no caben todos. Tal vez por eso el Foro de Davos fue más allá y sentenció que en 2030 no tendremos nada, pero seremos felices. Le habla al 99% de la humanidad. El 1% restante no tendría de qué preocuparse porque lo tendría todo.

Una pregunta constante ante la observación de los hechos es: ¿alcanzan las categorías utilizadas hasta el momento (izquierda, derecha, democracia, dictadura, imperialismo) para leer lo que sucede? En este momento de transición económica, geopolítica y civilizatoria, los signos políticos exigen revisar las estructuras con las que pensar.

En el contexto del vertiginoso desarrollo del régimen de acumulación y la transición del sistema capitalista hacia la era del metaverso, la democracia expone sus objetivos y sus limitaciones. El capital ya no la necesita como lo hizo durante más de dos siglos para organizar la estructura política en el ámbito internacional, aunque los deteriorados Estados nación continúan siendo un escenario importante en la lucha por la riqueza producida socialmente por la clase trabajadora. Es que lo viejo no termina de morir, aunque lo nuevo avanza vertiginosamente.

En esta transición geopolítica y civilizatoria, un fantasma recorre la región y no es el del azulado comunismo del siglo pasado, sino el de la actualización permanente de la Doctrina Monroe 4.0 en su capítulo de Doctrina de Nuevas Amenazas, en un momento de guerra multidimensional. La alternancia de proyectos populares y neo reaccionarios en posición de gobierno limita los alcances de un proyecto de integración soberana. En la vereda de enfrente, se profundiza la coordinación internacional de las derechas y ultraderechas, encumbradas en espacios de poder, que pugnan por el desarme de los bloques y espacios conocidos de integración.



El vaciamiento en estos años de la UNASUR es tal vez el ejemplo más paradigmático del cambio en las correlaciones de fuerzas políticas, a escala. Varios países sudamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador, se retiraron del bloque, debilitando significativamente el poder de coordinación y maniobra del grupo, en la resolución de los asuntos nuestroamericanos desde una política soberana. Las contradicciones hacia el interior de la CELAC también expresa la disputa de modelos.

Algunos procesos electorales lograron reponer gobiernos progresistas, como en México, Brasil, Colombia y Bolivia. Otros dieron paso o reafirmaron gobiernos con discursos “anticasta” y represivos, como expresión de movimientos políticos que supieron leer los signos de la nueva fase del capitalismo digital, cuya superestructura de plataformas cambia las lógicas del poder, horadando la fe popular en las estructuras partidarias conocidas. Tales son los casos de Argentina, Ecuador y Perú (golpe de Estado a Pedro Castillo, mediante).

Los signos políticos de la descomposición democrática se despliegan a sus anchas: la justicia devenida en partido judicial, los ejércitos regulares en el terreno institucional y los irregulares predominantemente en el territorio virtual, actúan como los brazos de maniobra de desestabilización de gobiernos latinoamericanos progresistas. Muchos de ellos llegan débiles al poder por la alta fragmentación y el tejido de alianzas con los “centros y centro-derechas” que los condicionan, en escenarios de altísima polarización política.



Las fronteras son zonas calientes por donde circulan millones de migrantes, símbolo de la expulsión económica y la exclusión social del sistema capitalista que amplía su ejército de reserva y su “población sobrante” -ahora en movimiento- al tiempo que desarrolla sus fuerzas productivas, ya en una fase de digitalización.

La lucha contra la llamada “ideología de género” es una de las banderas que levanta el movimiento neoreaccionario, que busca expandirse a nivel regional. Los transfeminismos se mantienen alerta y en lucha, en medio de un proceso en el que experimentan pérdidas de derechos adquiridos como en Argentina y depositan esperanzas en nuevos tiempos políticos que se aperturan en países como México. Pero que también se han unificado para denunciar el saqueo económico de gobiernos neoliberales y el genocidio palestino.

¿Cuáles son los caminos hacia la justicia social duradera? ¿Dónde golpear con contundencia? ¿Quiénes son hoy los actores de la dominación? No se debe olvidar que desde la caída estrepitosa del ingreso per cápita durante la Pandemia de Covid19, los índices de concentración de la riqueza y de desigualdad no han hecho más que aumentar la conflictividad social. Las calles latinoamericanas han oficiado de un constante hervidero. Un territorio que también disputan los actores neoreaccionarios, llevando a cientos de miles de personas a la protesta activa en el espacio público, incluyendo el territorio virtual.



La pregunta sobre la manera en que debe rearticularse el proyecto popular latinoamericano para avanzar en los intersticios que proponen las crisis de este tiempo, está abierta.

Con estas reflexiones como marco se recorren, a lo largo de estas páginas, los principales acontecimientos de los primeros seis meses del año en torno a los procesos electorales, movilizaciones y protestas sociales, mecanismos de integración y conflictos diplomáticos y fronterizos, los transfeminismos, la crisis y luchas ambientales, procesos de lawfare contra dirigentes populares, la transición energética los nudos centrales del mundo del trabajo y del agro.





**AMÉRICA LATINA
PARA ARMAR:
MAPA ELECTORAL
DE LA REGIÓN**

AMÉRICA LATINA PARA ARMAR: MAPA ELECTORAL DE LA REGIÓN

Los procesos electorales cruzan de sur a norte y de este a oeste el continente, este 2024. Los resultados de las elecciones que ya se realizaron y las que quedan por suceder nos aportan datos para observar la manera en que se irá armando el mapa contemporáneo en la región latinoamericana y caribeña. De lo que suceda, dependerán alianzas y alineamientos y el fortalecimiento o la debilidad de los proyectos que se encuentran en pugna en la región.

A continuación recorreremos cada uno de los países que celebraron elecciones presidenciales y legislativas, así como los procesos que quedan por resolverse el resto del año, en un intento de avizorar cómo terminará de armarse el mapa político regional.



EL SALVADOR: REELECCIÓN Y HEGEMONÍA PARLAMENTARIA

El 4 de febrero de 2024 los salvadoreños votaron, por primera vez en casi un siglo, por un presidente que buscaba la reelección. Basándose en una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuesta el 1 de mayo de 2021 por diputados oficialistas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a Bukele como candidato presidencial de Nuevas Ideas. El mandatario alcanzó la victoria con un 84,6% de los votos. El recuento electoral de las legislativas, reveló que su partido reunió 54 escaños de los 60 de la Asamblea Legislativa.

La nueva aritmética que posicionó al partido oficialista con mayoría casi absoluta en el órgano legislativo se debió a la reforma que redujo de 84 a 60 la cantidad de bancas, el cambio de la fórmula de asignación de escaños y la reorientación de votos en el exterior al departamento de San Salvador.



Nayib Bukele  
@nayibbukele

...

De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea.

El récord en toda la historia democrática del mundo.

Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional.

Dios bendiga a El Salvador.

[Translate post](#)

9:56 PM · Feb 4, 2024 · **8.2M** Views

Desde el Palacio Nacional, cuando se había escrutado 31,5% de los votos Bukele dijo que había roto “todos los récords de todas las democracias en la historia del mundo”. Mientras una multitud en el centro histórico lo ovacionaba el presidente remarcó: “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada”. Además arremetió contra periodistas, organizaciones internacionales, los Acuerdos de Paz y Estados Unidos, que habían cuestionado las reformas y la situación de los derechos humanos en el país, vanagloriándose de que El Salvador, bajo su mandato, pasó de ser el país más inseguro del mundo al más seguro.

Bukele, de 42 años, es un fiel exponente de los nuevos emergentes de esta época. Joven, religioso, de mano dura, pero aggiornato al mundo de la publicidad y las redes sociales, adaptó su discurso a las exigencias del contexto. Con el apoyo de las fuerzas militares logró construir hegemonía en los poderes públicos del Estado. Es usuario empedernido del twitter y además del modelo de seguridad que supo exportar a nivel regional a partir de mega producciones audiovisuales de alto impacto se presentó “de cara al futuro”, disponiendo al bitcoin como una moneda de curso legal en su país.



A través del uso de la figura del Estado de Excepción, cuestionado por la suspensión de todo tipo de garantías constitucionales controló el territorio y ganó la batalla contra “las organizaciones criminales”.

Para la política externa no ha tenido pruritos de profundizar relaciones con China, al tiempo que negoció ayudas económicas de EEUU. Ahora ofrece asesoría a gobiernos similares, como el de Argentina o Ecuador, para desarrollar políticas de seguridad y control territorial.



La Jornada Tlaxcala @JOrienteTlax · Jul 18

#Internacional | Más de 3 mil niños arrestados en el Salvador durante estado de excepción de #Bukele, alerta Human Rights Watch (@hrw_espanol)



44

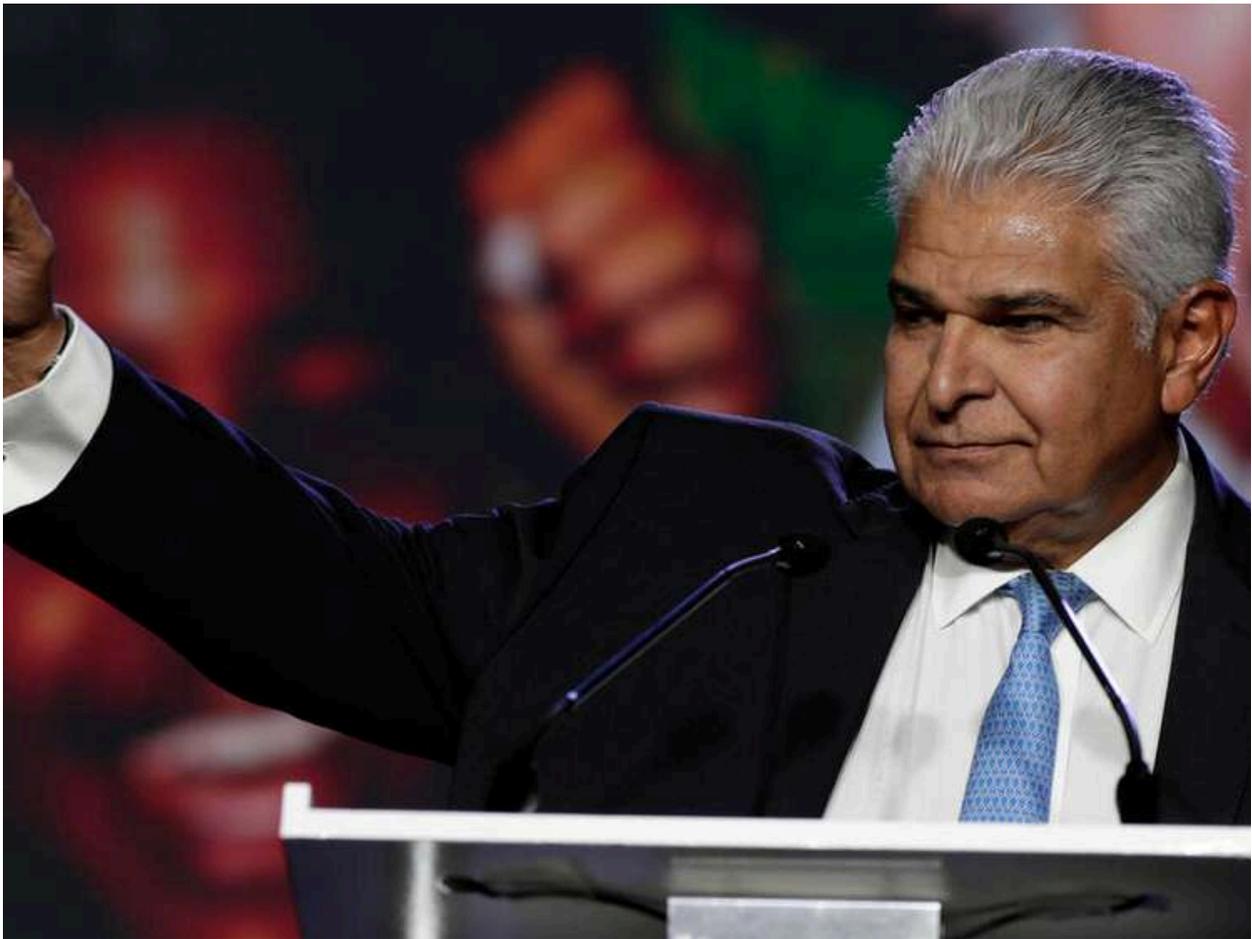
PANAMÁ: MULINO AL GOBIERNO, MARTINELLI AL PODER

Panamá, tuvo elecciones presidenciales el pasado 5 de mayo, signadas por problemáticas como la crisis migratoria en la región del Darién, la disminución del comercio internacional a través del canal de Panamá y el ingreso del país a la categoría de paraíso fiscal.

Tras la inhabilitación por parte del Tribunal Electoral (TE) del ex presidente y poderoso empresario de los alimentos, Ricardo Martinelli (2009-2014), José Raúl Mulino se transformó en muy poco tiempo, en el candidato presidencial de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, luego de ser señalado por Martinelli como su relevo. Así fue electo presidente para el periodo 2024-2029, tras obtener más del 34.4% de los votos emitidos (más de 751,184 mil votos) dejando muy por detrás a los otros siete candidatos.



Al conocer los resultados, manifestó que, si bien impulsará un gobierno pro inversión y pro empresa privada, no se olvidará “de los que tienen hambre, de los que quieren un empleo y de los que necesitan agua potable en todo el país todos los días”. Al día siguiente, tuvo su primera reunión con la embajadora de EEUU en su país, Mari Carmen Aponte, con quien conversó sobre migración irregular, comercio bilateral, inversiones estadounidenses en Panamá y seguridad, según informó en X.



Mulino llega al poder, ungido por el recuerdo popular de la gestión de Martinelli, de la que fue parte en varios puestos, cumpliendo un rol protagónico en procesos represivos, como ministro de Seguridad.

La popularidad de Martinelli se vio beneficiada por un período de muy alto crecimiento económico y su capacidad de combinar esto con la inversión en políticas sociales (subsidios y obras públicas), y una capacidad de garantizar gobernabilidad a partir de leyes ajustadas a los intereses de las corporaciones y represión.

El país que deja el expresidente Laurentino Cortizo, además de haber sido señalado este año por la OCDE como un paraíso fiscal, es un país golpeado por el mal manejo de la pandemia, el aumento de la deuda externa, la corrupción y una contundente derrota en el conflicto con organizaciones populares por la Ley sobre minería, que ocurrió en 2023.

Así, a diferencia de su jefe político, Mulino asumirá su mandato en medio de una recesión económica causada por múltiples factores, entre ellos la crisis financiera, de salud, escasez de agua, un drama migratorio y un movimiento popular que a fuerza de los conflictos en 2022 y en 2023, se ha ido robusteciendo en articulación y acción callejera.

MÉXICO: HACIA EL SEGUNDO PISO DE LA 4T

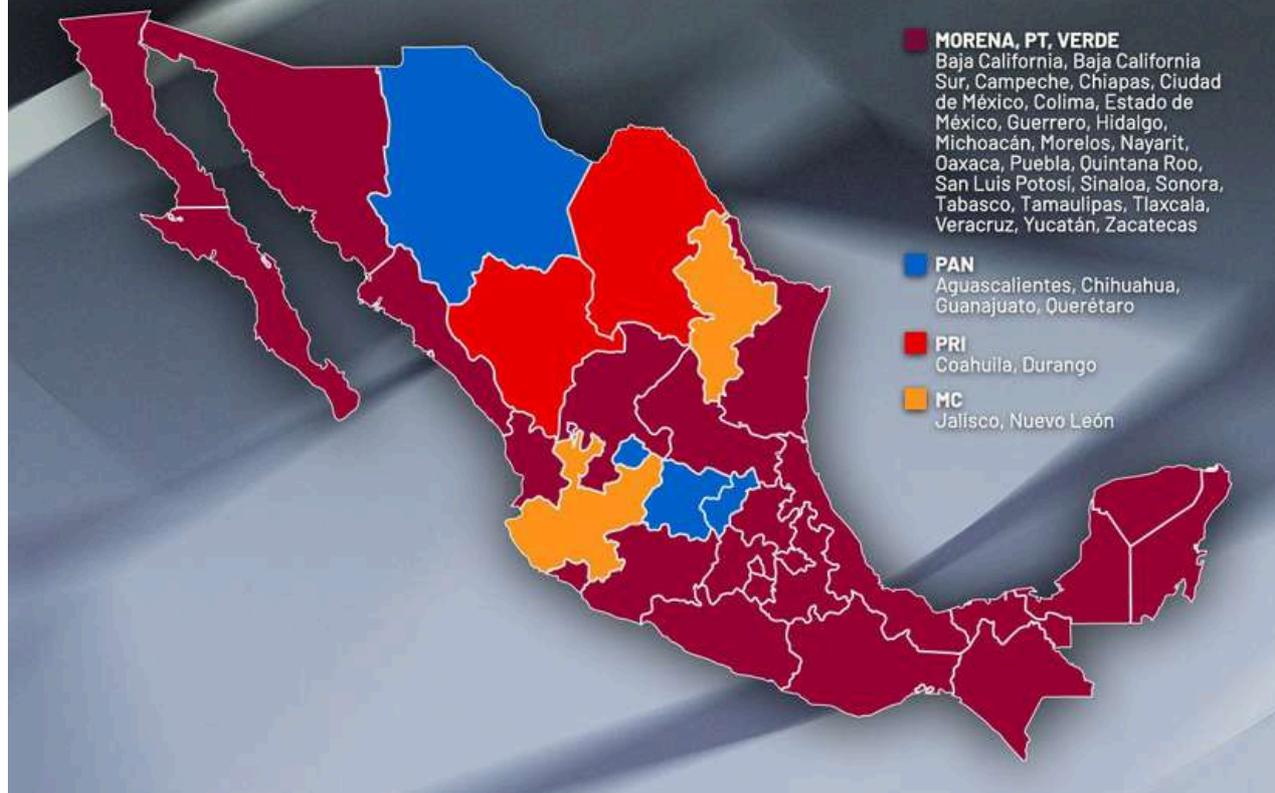


El domingo 2 de junio, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista ganó cómoda las elecciones presidenciales con el 59,35% de los votos, a más de 30 puntos de distancia de Xóchitl Gálvez, representante de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD que obtuvo cerca de 27,9%, y casi 40 puntos de diferencia con Jorge Álvarez Maynes, de Movimiento ciudadano que alcanzó 10,41% de los votos, en el conteo preliminar.

La coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) se hizo también de seis de las ocho gobernaciones en disputa y logró retener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde Claudia Brugada, le ganó con el 51.75% de los votos a Santiago Taboada (PRI-PAN-PRD). En el Congreso terminó de consolidar su fuerza, donde, según las estimaciones realizadas sobre el 94 por ciento de las actas escrutadas, conquistó 365 bancas en diputados y 83 en senadores.

Con estos resultados el proyecto lopezobradorista del que Sheinbaum será continuadora, se encuentra holgado para continuar desarrollando el denominado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

RESULTADOS GUBERNATURAS 2024



Fuente: Excélsior

Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera presidenta de México”. “Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero, sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación”, pronunció la presidenta electa a la medianoche de aquel domingo en su primer discurso.

Los próximos seis años no estarán exentos de avances y retrocesos para Sheinbaum. El mundo en disputa y el proceso de avanzada de las derechas en Latinoamérica sitúa a México en un rol central en la geopolítica internacional. Las políticas económicas hacia el mundo y el trabajo y las soluciones eficaces a la violencia y la migración serán temas clave para la agenda de Sheinbaum, ahora bajo la vigilancia no sólo de las derechas, que no tardarán en desplegar su agenda reaccionaria, sino también de las bases sociales, que esperan con ansias la conquista del prometido segundo piso de la Cuarta Transformación.

REPÚBLICA DOMINICANA

El 19 de mayo de 2024 República Dominicana eligió al presidente del país, el vicepresidente y los miembros del Congreso bicameral (32 senadores y 190 diputados), así como 20 representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y otras organizaciones aliadas, fue reelecto en primera vuelta tras vencer a los principales candidatos de la oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez.

Abinader es licenciado en Economía y posee estudios de posgrado en Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera (Harvard) en Estados Unidos. Es hijo del empresario de ascendencia libanesa y ex senador conservador, José Rafael Abinader. Nunca había ejercido cargos públicos hasta que fue elegido para la presidencia en 2020, hasta ese momento dedicó su vida profesional al grupo Abicor, la empresa familiar.

En 2021, la investigación “Pandora Papers” conectó a Abinader con dos sociedades familiares en Panamá creadas antes de su llegada al poder: una vinculada a la Universidad Dominicana O&M y otra a una propiedad en La Romana. Es dueño de una cementera y varios hoteles. Tras ser electo, declaró un patrimonio neto de unos US\$70 millones, lo que lo hacía uno de los mandatarios más ricos de la región.

Su agenda ha estado marcada desde la pandemia del 2020 en atraer más turistas al país, un discurso anticorrupción y controlar a toda costa la política migratoria con Haití, impulsó la construcción de una valla fronteriza, rechazó la llegada de refugiados y aumentó las deportaciones de haitianos.

Para su segundo mandato, el dominicano Abinader enfrenta desafíos como la inflación y la inseguridad pública, una de las mayores preocupaciones de los dominicanos, y plantea reformar la Constitución para fortalecer instituciones como el Ministerio Público.

CAMINO A LAS URNAS

En otro orden se observa en la región un conjunto de procesos en desarrollo que expresan la disputa abierta, las crisis y el empate de fuerzas que no termina de resolverse en varios países.

VENEZUELA: EXPECTATIVAS SOBRE UNA ELECCIÓN ESTRATÉGICA

La República Bolivariana de Venezuela avanza hacia el proceso electoral planificado para el 28 de julio, con el consenso de un amplio arco político. Recientemente, ocho de los 10 candidatos presidenciales se comprometieron a respetar los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral luego de la votación. Como era de esperarse no acudieron a la firma del acuerdo el candidato de la derecha radical de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González ni Enrique Márquez, postulado por Centrados. Además, en abril, el gobierno norteamericano reimpuso el bloqueo de operaciones petroleras extranjeras para responder a la firmeza del gobierno venezolano respecto de la inhabilitación política de María Corina Machado. La dirigente de ultra derecha está acusada de participar en planes golpistas y en la entrega de recursos de la empresa Citgo. Además, en varias ocasiones, solicitó intervenciones militares extranjeras en su país. Sin ir más lejos se así lo hizo recientemente con el gobierno de Israel.

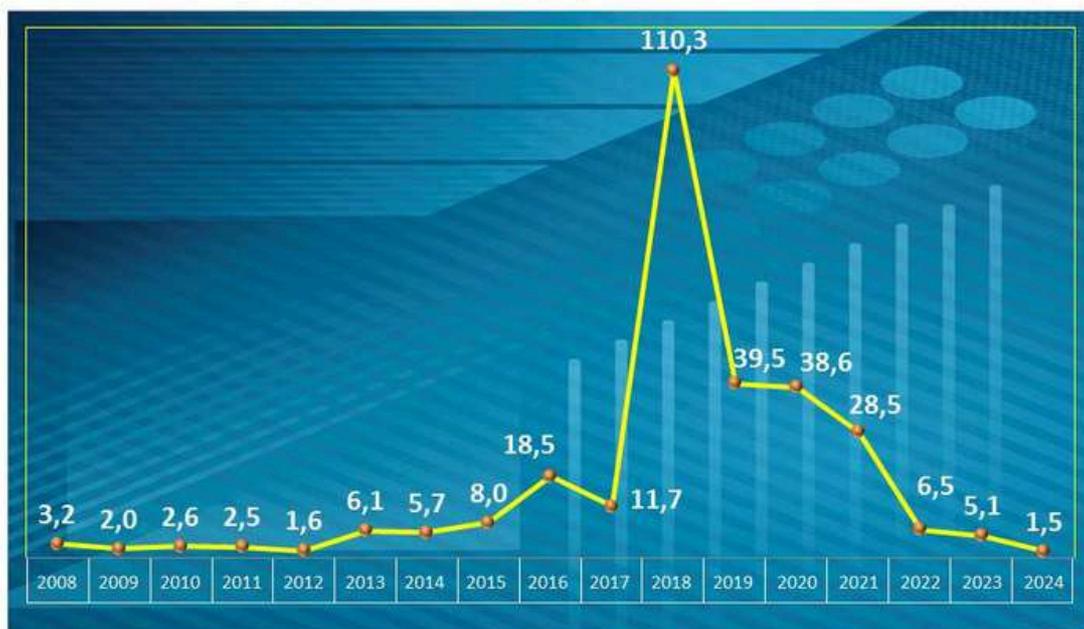
En mayo, la Unión Europea dispuso la renovación de medidas coercitivas unilaterales, hasta enero de 2025, cuando asuma el nuevo gobierno. Al mismo tiempo y para matizar las presiones, flexibilizó restricciones de viajes contra algunos funcionarios venezolanos. En respuesta, desde el Congreso, se solicitó revocar la invitación a las y los observadores del bloque.



A principios de julio, Nicolás Maduro informó que había aceptado la propuesta de EEUU para reiniciar conversaciones, para lo que designó como representante de esa misión a Jorge Rodríguez. Tras el primer encuentro, el 3 de julio, Rodríguez informó que acordaron trabajar de forma conjunta para ganar confianza, mejorar las relaciones y mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. También dijo que Venezuela expresó su rechazo por “las tergiversaciones” publicadas por voceros del gobierno estadounidense sobre ese diálogo y su intención de limitar el diálogo a lo acordado durante las conversaciones de Qatar, plasmadas en parte en los acuerdos de Barbados. También dijo que para el desarrollo de tales conversaciones deben respetarse los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad.

En materia económica el gobierno venezolano está controlando variables fundamentales como la inflación desmedida, la devaluación y la fluidez del comercio. Desde la vicepresidencia se informó que se estima un crecimiento de 8% para 2024, al tiempo que se prevé una inflación anual por debajo del 50%, logrando en mayo un índice de 1.5% inédito en 20 años. Además la multiplicación por decenas de miles de nuevos comercios y marcas comerciales desde 2020, reflejan un nuevo dinamismo económico en el país. De acuerdo con un informe con datos oficiales publicado en Misión Verdad el flujo público (25%) y privado (75%) de divisas al mercado cambiario, “ha permitido una estabilidad de la relación bolívar-dólar que tenía tiempo sin verse y que tiene su expresión en una variación de solo del 1,17% entre el 1 de enero de 2024 al 25 de junio de este mismo año”.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Inflación mensual del mes de mayo
Período: 2008 a 2024
(%)



Fuente: Banco Central de Venezuela

En otro orden, luego de la amplia participación popular en la discusión de la candidatura del proyecto bolivariano, una consulta para la elección de proyectos locales de gestión popular movilizó a los órganos de participación política del país durante abril y mayo. Una muestra de la vitalidad del proceso de construcción de la democracia participativa con protagonismo popular que se construye en Venezuela.

A principios de julio, Nicolás Maduro informó que había aceptado la propuesta de EEUU para reiniciar conversaciones, para lo que designó como representante de esa misión a Jorge Rodríguez. Tras el primer encuentro, el 3 de julio, Rodríguez informó que acordaron trabajar de forma conjunta para ganar confianza, mejorar las relaciones y mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. También dijo que Venezuela expresó su rechazo por “las tergiversaciones” publicadas por voceros del gobierno estadounidense sobre ese diálogo y su intención de limitar el diálogo a lo acordado durante las conversaciones de Qatar, plasmadas en parte en los acuerdos de Barbados. También dijo que para el desarrollo de tales conversaciones deben respetarse los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad.



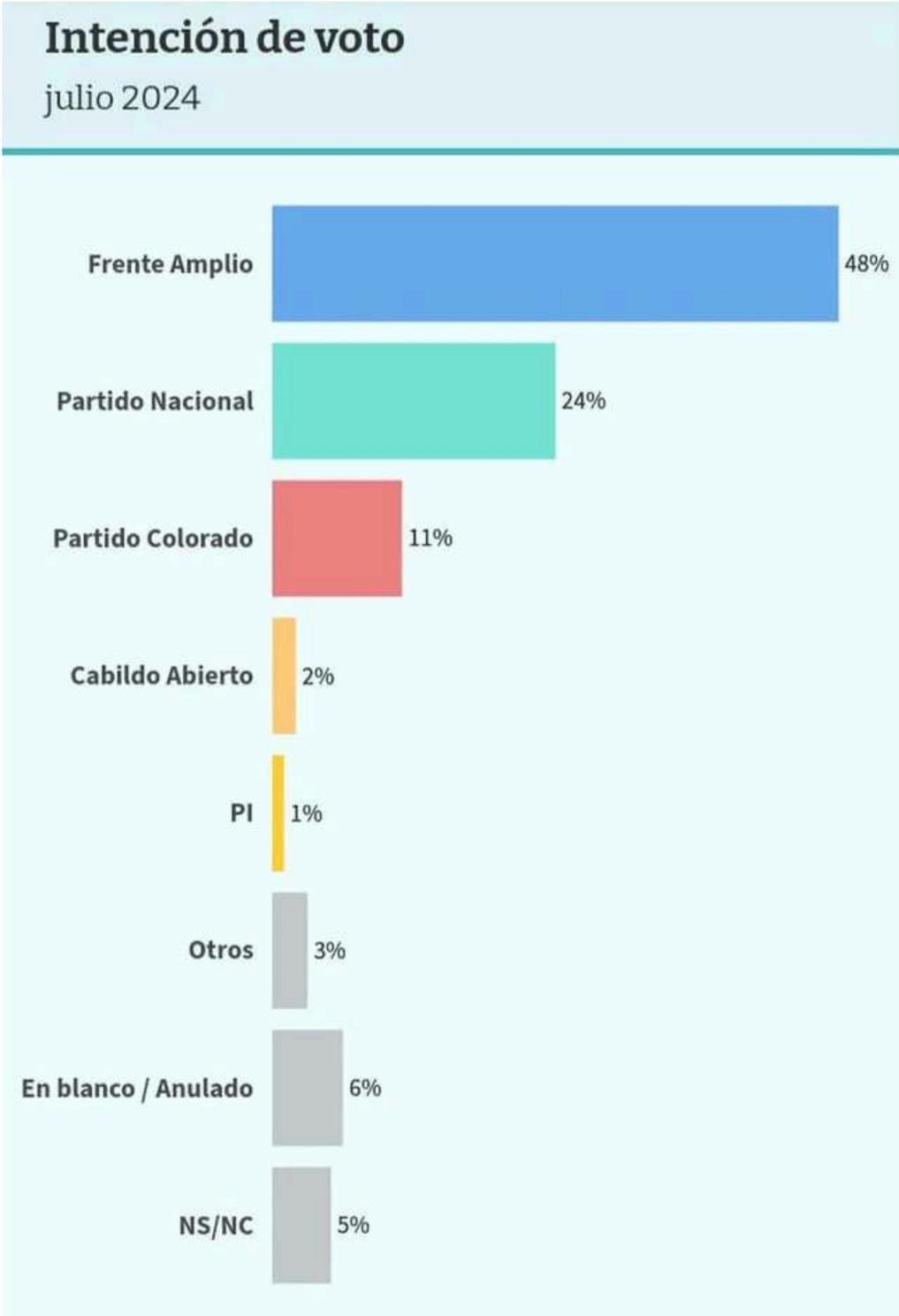
URUGUAY: EL FRENTE AMPLIO REÚNE CONDICIONES PARA UNA VICTORIA EN OCTUBRE

El último día de junio se llevaron a cabo las elecciones internas en Uruguay, que se prepara para los comicios presidenciales el 27 de octubre de este año en los que también se renovarán en su totalidad las cámaras de Senadores (30) y Diputados (99). Yamandú Orsi, ex intendente del municipio de Canelones y postulado por el Movimiento de Participación Popular, del ex presidente José Mujica, obtuvo 60% de los votos dentro de la interna del Frente Amplio. Álvaro Delgado, actual ministro de Interior alcanzó 75% dentro del oficialista Partido Nacional y Andrés Ojeda, mediático abogado panelista, obtuvo 39.9% de los votos del Partido Colorado.

En la misma noche del domingo, mientras Orsi selló rápidamente la fórmula con Carolina Cosse, en el comando de Delgado demoraron más de tres horas para anunciar, como candidata a la vicepresidencia, a Valeria Ripoll. En el caso del Partido Colorado al día siguiente por la tarde, anunciaron la conformación de la fórmula con Robert Silva.



Dos aspectos importantes para tener en cuenta: A nivel general, el FA superó los 400.000 votos y revirtió la tendencia de las últimas dos internas, convirtiéndose en la fuerza política más votada. Un hecho que deja bien posicionada a la coalición de izquierda de cara a las elecciones de octubre. En otro orden, el porcentaje de participación (35, 3%) en estos comicios, que no son obligatorios, se configuró como el más bajo desde 1997, cuando comenzaron a celebrarse elecciones internas. El mensaje a la clase política y, particularmente al partido oficial de gobierno, es contundente. Los programas políticos que se encuentran en carrera, deberán esforzarse camino a octubre para interpretar y reflejar las demandas populares uruguayas.



Fuente: Usina de Percepción Ciudadana

BOLIVIA: ESCALADA DE LA INTERNA POLITICA DEL MAS Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL

El intento de Golpe de Estado que se vivió en Bolivia la última semana de junio, dejó varias señales y un gran mensaje de cara a las elecciones de 2025. Por un lado, las exigencias con las que se alzaron las Fuerzas Armadas (liberación de los presos por los sucesos de 2019, como Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y agentes militares, y cambios en el gabinete) dejaron claro el juego político que el cuerpo armado ostenta en el país, aun en contra de los preceptos constitucionales que señalan que las Fuerzas Armadas no están habilitadas para la deliberación en este plano. Por otro lado, las fuerzas populares demostraron una memoria activa, que les permitió reaccionar a los llamados del presidente, Luis Arce y de Evo Morales, para bloquear el desencadenamiento de un Golpe de Estado.

Pese a ello las internas que se libran hacia adentro del Movimiento al Socialismo (MAS), dejan al descubierto la debilidad político institucional de cara a las próximas elecciones de 2025.

Recordemos que en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló la reelección indefinida e inhabilitó a Evo Morales para presentarse como candidato a un tercer mandato en las elecciones de 2025. Esta decisión fue tomada luego de una maniobra, avalada por el gobierno, que permitió prorrogar el mandato de los miembros del TCP, vencido en 2023. El 9 de enero de este año, Evo Morales pidió una auditoría jurídica del Tribunal y el 17 de enero el ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó la sentencia sobre su inhabilitación. En las semanas siguientes cocaleros y otras organizaciones campesinas desarrollaron protestas para apoyar a Evo y repudiar las atribuciones de la Justicia. Se registraron 22 puntos de bloqueo en rutas de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz y hubo enfrentamientos con la policía.



Luego de la fallida aventura golpista de Zúñiga, el 30 de junio Evo Morales, afirmó en su cuenta de X que el Intento de Golpe había sido un “engaño” y una “mentira” del presidente Luis Arce. En los días siguientes, volvió a postear declaraciones, pidiendo que se investiguen los hechos ocurridos y repudiando la intromisión de Argentina, cuyo presidente minimizó el intento de Golpe de Estado.

Mientras la Fiscalía pública inició una investigación sobre unos 30 militares y civiles por las acciones que llevaron adelante el 26 de junio, el senado boliviano creó una comisión especial a tal fin. Por su parte el gobierno nacional convocó al embajador de Argentina en Bolivia, Marcelo Adrián Massoni, para expresarle su rechazo a las declaraciones del Presidente Javier Milei, sobre el tema.

En una entrevista, Arce comparó la reacción de Evo Morales con las declaraciones de Javier Milei.

La crisis económica por la que atraviesa el país y la oportunista pero fallida aventura militar, deja un mensaje claro para el proyecto popular boliviano, sobre la necesidad de construir unidad de cara al proceso electoral de 2025.



PERÚ: LA IMAGEN DEL GOBIERNO EN DECLIVE

En Perú, donde aún no es clara la posibilidad de que se adelanten las elecciones, el gobierno de facto de Dina Boluarte disminuye cada vez más su apoyo ciudadano en medio de escándalos de corrupción. Recientemente, se aprobó un proyecto de ley para prescribir crímenes de lesa humanidad previos a 2002, lo que favorecería al ex dictador Alberto Fujimori, quien se pasea en libertad, tras un indulto otorgado por el gobierno de Dina Boluarte.

La iniciativa legislativa ha generado críticas internacionales, revela una crisis política profunda y el desgaste institucional que el país arrastra hace al menos un quinquenio. Los hechos que buscan dejar impune al fujimorismo, revelan la manera en la que la fuerza política encolumnada tras el dictador peruano sigue siendo un actor influyente. Mientras, Dina Boluarte, enfrenta una serie de escándalos y acusaciones de corrupción. La desaprobación hacia su gobierno, cercana al 90% pese al apoyo del fujimorismo en el parlamento, refleja un panorama político frágil. En este contexto la demanda de consolidar un llamado a elecciones antes de 2026, cuando vencería el mandato de Pedro Castillo, gana fuerza. Mientras tanto, el proyecto neoliberal avanza con la violencia y el saqueo que le caracterizan. Sin embargo, la crisis peruana tiene emergentes regionales y populares que hacen pensar que el triunfo electoral de Pedro Castillo, quien ha declarado que no se retirará de la escena política, no fue producto del azar. El Perú profundo, ese que se encuentra alejado del epicentro institucional limeño, tiene raíces muy fuertes y con capacidad de engendrar nuevas primaveras.



¿QUÉ ESPERAR DE LAS URNAS LATINOAMERICANAS?

Lo que resulte en los procesos electorales de Venezuela y Uruguay será fundamental para contribuir a ensanchar el bloque progresista capaz de tejer una alianza en la región, en el que podría ubicarse con más o menos matices a Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, con la reciente ratificación de México, la segunda economía más grande de la región. De la capacidad de estos gobiernos de imponer programas coincidentes con el proyecto estratégico del pueblo, salteando operaciones y estrategias desestabilizadoras, depende la posibilidad de que se sostenga viva en la región la fuerza de un proyecto con intenciones soberanas, que contenga en su horizonte el combate a la concentración de la riqueza, la redefinición de la democracia, para amplificar la participación política de las mayorías y la protección de los territorios y los recursos naturales. La contracara, es el avance del modelo de securitización de un Estado policíaco, el revestimiento de un modelo económico digital y financiero que conquista electorados hastiados y devuelve más pobreza, exclusión, absolutismo, vigilancia y control.



A large crowd of people, many wearing face masks and hooded clothing, is gathered in a public square or street. In the foreground, several police officers in riot gear, including helmets and shields, are visible. One officer's helmet has the number '1219' on it. The scene is filled with a sense of tension and conflict.

**CALLES Y
TERRITORIO
VIRTUAL.
UN ESCENARIO
EN DISPUTA**

CALLES Y TERRITORIO VIRTUAL. UN ESCENARIO EN DISPUTA

Para comprender y actuar sobre la realidad que vivimos, necesitamos establecer algunos elementos estructurales y superestructurales que atraviesan y dividen el mundo, ya que son la verdadera causa de las protestas sociales que observamos.

La cuarta revolución industrial, las transformaciones que trae consigo el acelerado proceso de digitalización de la economía, los cambios en los modos de producción y circulación de bienes que favorecen a sectores cada vez más concentrados de capital, sumergen a las grandes mayorías, cada vez más excluidas, en una crisis general de una profundidad y extensión sin precedentes. Estos cambios económicos impactan y modifican toda la superestructura política, así como la forma de organizarnos y de luchar como clase trabajadora por el reparto de la riqueza socialmente producida.

Durante los primeros seis meses del 2024, hubo masivas concentraciones y movilizaciones, impulsadas por sectores populares que asumieron un rol protagónico. Ante el empobrecimiento y los procesos de exclusión cada vez más profundos, la falta generalizada de empleo, los aumentos de los costos de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la conflictividad ha ido en aumento.



Sin embargo los sectores neo reaccionarios y conservadores también movilizaron sus fuerzas vivas con discursos destituyentes y de odio.

Entre las diversas estrategias utilizadas para la organización y la movilización, podemos observar la importancia clave de la virtualidad. Un territorio en disputa, principalmente el de las redes sociales, donde circulan y se instalan consignas y programas destinados a crear imaginarios sociales.

Observamos entonces que aquellos territorios de expresión (tanto la calle como la virtualidad) no sólo son el lugar donde los proyectos populares acuden para tomar nota de las necesidades sociales y refrendar las bases de su apoyo, sino que son objeto de disputa de las distintas fuerzas sociales y a menudo se convierten en el lugar donde la violencia cobra protagonismo y las fuerzas de ultraderecha utilizan para intentar instalar programas neoliberales.

A continuación recorreremos ejes y hechos que consideramos emblemáticos para describir la manera en que se desarrolló la protesta estos primeros seis meses en la región.



PROTESTAS QUE ATRAVESARON TODA AMÉRICA LATINA

El Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de los Trabajadores y la solidaridad con Palestina, han sido grandes aglutinantes del proceso de movilización en la región estos primeros seis meses de 2024. Tales eventos reflejan tensiones persistentes en la región. Los movimientos que ocuparon la calle por estos motivos articulan resistencias frente a problemáticas comunes, como la desigualdad estructural, la precarización laboral, las políticas neoliberales y el sometimiento de potencias internacionales a pueblos en condición de debilidad. A través de estas protestas, se evidencia una búsqueda colectiva por justicia social, equidad de género y solidaridad a nivel global.



El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+ en América Latina se movilizaron para visibilizar y denunciar las problemáticas que enfrentan, como la violencia, la discriminación y la falta de acceso a políticas de salud sexual y reproductiva.

8 M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

En Ciudad de México, más de 180 mil personas marcharon exigiendo justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas, y por la igualdad salarial, educación sexual y reproductiva, y acceso a la justicia, en un año electoral significativo con dos candidatas mujeres para la presidencia. En Caracas, alrededor de cien manifestantes demandaron el derecho al aborto seguro, salarios justos, y la eliminación de impuestos a productos menstruales. En Lima, la marcha se organizó en diversos bloques, incluyendo trabajadoras sexuales y mujeres con discapacidad, pronunciándose contra la presidenta Dina Boluarte y exigiendo justicia por feminicidios y desapariciones, así como derechos laborales y sociales. En Asunción, cinco mil mujeres se reunieron para defender sus derechos laborales, políticos y sociales, denunciando la precarización laboral y el aumento de feminicidios.



En Santiago de Chile, decenas de miles de personas marcharon tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con un enfoque en la expresión cultural como forma de protesta. En Buenos Aires, miles de mujeres protestaron contra las políticas del presidente Javier Milei, destacando la resistencia del movimiento feminista conocido como la Marea Verde. En otras ciudades, como Guatemala, Puerto Rico, Bogotá y Montevideo, también se realizaron importantes movilizaciones con demandas específicas relacionadas con la violencia de género, los derechos laborales y el acceso a la salud sexual y reproductiva y exigiendo “Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”.

DÍA DEL TRABAJADOR

El Día Internacional de los Trabajadores fue marcado por multitudinarias marchas en varias ciudades de América Latina, donde miles de personas reclamaron mejoras salariales, protestaron contra reformas laborales y, en algunos casos, apoyaron al gobierno. En Buenos Aires, Argentina, miles de trabajadores protestaron contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, con consignas como "La patria no se vende". En São Paulo, Brasil, el presidente Lula da Silva participó en un evento sindical y abogó por una menor carga fiscal para los pobres, diciendo "solo pagan los pobres". En Santiago, Chile, unas 5,000 personas lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores marcharon por mejores sueldos, coreando "Tu enemigo es el patrón", mientras en Bogotá, Colombia, miles de seguidores del presidente Gustavo Petro apoyaron sus propuestas de reformas laborales y sociales.



En La Habana, Cuba, miles de personas se reunieron en la Tribuna Antiimperialista portando banderas y retratos de Fidel Castro, denunciando el embargo estadounidense. En Quito, Ecuador, unas 5,000 personas exigieron mejores condiciones laborales y rechazaron el aumento del IVA, con la consigna "Está duro conseguir trabajo". Por su parte miles de trabajadores se movilizaron en Caracas para celebrar el Día Internacional del Trabajador con Nicolás Maduro, mostrando un fuerte respaldo al gobierno en respuesta a las medidas coercitivas unilaterales internacionales. Durante la marcha, destacaron los avances en la dignificación laboral bajo la Revolución Bolivariana y reafirmaron su apoyo a la Ley Orgánica del Trabajo.

Finalmente, en Montevideo, Uruguay, unas 2000 personas convocadas por Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) protestaron por la reforma del sistema de seguridad social y criticaron al gobierno de Luis Lacalle Pou, pidiendo "un cambio profundo".

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

En abril de 2024, las universidades estadounidenses como Columbia, Harvard, Yale y MIT fueron testigos de protestas estudiantiles intensas en medio del conflicto en Gaza. En Columbia, hubo enfrentamientos con consignas pro Palestina y pro Israel, resultando en medidas de seguridad y la transición a clases virtuales. En Harvard, el Comité de Solidaridad Palestina fue suspendido por violar políticas universitarias, mientras que en Yale, la policía detuvo a 45 manifestantes por allanamiento. En el MIT, estudiantes instalaron campamentos exigiendo un cese al fuego y criticando la respuesta institucional ante la crisis humanitaria en Gaza.

Desde que Israel inició brutales ataques contra la población civil en la Franja de Gaza, luego del asalto de Hamás en Tel Aviv, miles de personas en varios países de América Latina han salido a las calles en solidaridad con Palestina y en rechazo a los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. En Quito, Ecuador, las protestas fueron organizadas por colectivos y activistas sociales, quienes se reunieron en el Parque El Arbolito y marcharon hacia la Embajada de Israel, exigiendo el fin de los ataques y la paz. Los manifestantes criticaron a Israel por lo que consideran un genocidio en Gaza y algunos quemaron una bandera estadounidense en señal de protesta contra la complicidad de Washington.

En Santiago, Chile, un gran número de personas se congregó frente a la Embajada de Israel, expresando su apoyo a Palestina y coreando consignas como "Gaza, resiste, Palestina existe". Chile alberga la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, y la protesta reflejó la profunda solidaridad de esta comunidad con su tierra ancestral.



En Brasil, manifestaciones masivas se realizaron en diversas ciudades, destacándose la concentración en la plaza Cinelandia de Río de Janeiro. Convocadas por organizaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos, las protestas clamaron por la paz en el Medio Oriente y exigieron el cese de los ataques israelíes. Al igual que en Ecuador, algunos activistas en Brasil quemaron banderas de Estados Unidos e Israel, denunciando lo que consideran prácticas de limpieza étnica y genocidio por parte de Israel.

En México, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó la instalación de un campamento en forma de protesta contra las acciones de Israel sobre Palestina, esto justo a un costado del edificio de Rectoría en la explanada de Ciudad Universitaria.

En relación a las formas que asumieron las protestas cabe destacar las iniciativas estudiantiles estableciendo campamentos como forma de mantener una presencia continua y visible. Además, se han organizado marchas tanto dentro como fuera de los campus, movilizando a la comunidad. Algunos manifestantes han optado por acciones más directas, como la ocupación de edificios universitarios, para llamar la atención de las autoridades y promover el diálogo sobre el conflicto en Gaza. A través de pancartas, consignas y acciones simbólicas como vigiliyas y discusiones académicas, los estudiantes han buscado educar y concientizar sobre la situación, mientras presionan a las instituciones educativas y gobiernos para que adopten posturas más éticas y solidarias.



CARAVANAS DE MIGRANTES

Las caravanas migrantes pueden ser vistas no sólo como movimientos de personas en busca de mejores condiciones de vida, sino también como un pronunciamiento. La manera que tienen de desplazarse en grandes grupos por miles de kilómetros, puede observarse como una forma de protesta colectiva. Este acto de movilización masiva desafía las políticas migratorias restrictivas de los países de destino, como Estados Unidos, y busca generar presión internacional para que se aborden las causas estructurales de la migración. Así, las caravanas migrantes se convierten en una forma de resistencia y denuncia contra las injusticias y las violencias sistemáticas que enfrentan en sus países de origen.

Estos fenómenos son una manifestación visible de múltiples crisis simultáneas en América Latina y otras regiones del mundo. La violencia de pandillas en Centroamérica, las crisis políticas y económicas, los conflictos armados en lugares como Sudán impulsan a las personas a emprender peligrosas travesías. La inestabilidad y la falta de oportunidades económicas, exacerbadas por el cambio climático y desastres naturales, también juegan un papel crucial en este fenómeno.



El 20 de enero de 2024, una caravana de 500 migrantes, principalmente hondureños y venezolanos, salió de Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades debido a la inseguridad y el desempleo. Desde 2010, más de 870.000 migrantes de diversas regiones han transitado por Honduras. En 2023, los cruces fronterizos irregulares entre México y Estados Unidos alcanzaron cifras récord, con la ONU señalando esta ruta como la más peligrosa del mundo debido a la alta mortalidad de migrantes.

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro se caracteriza por una política migratoria humanista, que reconoce la migración como un derecho humano. En tal sentido, durante el primer año de gestión más de 600 mil hondureños en el exterior lograron obtener sus pasaportes.

Ya en diciembre del 2023 el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que no impondría sanción administrativa a los flujos de migrantes extranjeros que ingresaran al país, a quienes además se les otorgó un permiso especial de permanencia hasta por un término de diez días.

La misma institución solicitó al Parlamento que le diera prioridad a la aprobación de un nuevo marco jurídico para la protección y el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes en "flujos migratorios mixtos, conforme a las nuevas realidades".

En junio de 2024, el gobierno anunció la apertura de un refugio seguro para los migrantes de diferentes países, donde se les brinda atención médica y psicológica durante el tránsito.

 **Gobierno de Honduras** 
@GobiernoHN 

 La Presidenta @XiomaraCastroZ inauguró este día el Centro de Atención al Migrante Irregular en Danlí, El Paraíso, esto representa el compromiso de nuestro Gobierno en la implementación de una política migratoria humanista, en donde los migrantes que transitan por Honduras cuentan con un refugio digno, atención médica y psicológica.

Sigue hilo 

[Translate post](#)





El 22 de ese mes, Castro se reunió con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, a fin de avanzar en acuerdos en la materia. Anunciaron la reactivación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para hacer frente a los problemas comunes a la población de ambas naciones, entre los que destacaron la crisis climática, la inseguridad y la crisis migratoria.

El evidente cambio de una política de contención a una política de protección de las y los migrantes, es el indicador de la preocupación genuina del gobierno hondureño que se traduce en medidas efectivas, bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos. Una novedad para el país, luego de más de una década de gobiernos fraudulentos que continuaron al golpe de Estado perpetrado en 2009 contra Manuel Zelaya.

En marzo de 2024, una caravana de aproximadamente 2.000 migrantes partió de Tapachula, Chiapas, en su arduo camino hacia Estados Unidos. Este grupo diverso incluye personas de Venezuela, Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, China y Sudán, reflejando la complejidad de la crisis migratoria actual.

La respuesta de Estados Unidos a la crisis migratoria ha sido insuficiente y, en muchos casos, contraproducente. Las políticas centradas en la militarización de la frontera y la disuasión sólo desplazan las rutas migratorias, exponiendo a los migrantes a mayores peligros y dejándolos a merced de traficantes y criminales.

Las caravanas migrantes son temas centrales en la agenda, particularmente para los países de Centroamérica, ya sea porque son punto de partida o porque transitan por allí hacia Estados Unidos. Tanto en México como en Panamá, El Salvador y Guatemala, que recientemente transitaban procesos electorales, el tema ocupó lugares centrales durante la campaña. La complejidad del problema, obliga a buscar soluciones multilaterales, aunque en muchas ocasiones queda invisibilizada la causa fundamental de este fenómeno: la pobreza estructural y la exclusión sistémica.

HAITÍ



El país se encuentra sumido en una crisis multidimensional sin precedentes, producto de una inestabilidad estructural, herencia de una historia marcada por la colonización franco-española y los intereses económicos, militares, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el Gran Caribe a partir del siglo XX.. Una cadena de desastres naturales y ambientales empeoraron el estado crítico de su economía.

Durante este año en Haití se llevaron adelante diversas manifestaciones, contra la inseguridad, el alza de los precios de los alimentos, la escasez y el aumento de los precios del combustible, además de las exigencias populares sobre la renuncia del Primer Ministro, Ariel Henry, quien asumió luego del magnicidio de Jovenel Moise en 2021 y no convocó a elecciones ni cedió el poder como estaba previsto en un acuerdo.

En enero, el país sufrió el mes más violento en dos años, con más de 1.100 personas afectadas por asesinatos, lesiones o secuestros relacionados con la violencia de las pandillas. La ONU contabilizó más de 500 mil personas desplazadas por esta razón en junio. Esta situación ha generado protestas antigubernamentales en al menos 24 ciudades, y las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.

Desde el mes de marzo los gobiernos de Estados Unidos, Kenia y El Salvador ya ofrecían su ayuda con el objetivo de “estabilizar la situación”.

Distintas bandas armadas ejercen el control territorial en Haití. La más conocida es el G9, liderada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien se manifestó en contra de una intervención extranjera y se presentó al frente de una coalición armada de hombres en “batalla para liberar (al país) de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos”. Chérizier pidió a la comunidad internacional una oportunidad para que el pueblo haitiano pueda tomar sus propias decisiones.

En abril de este año, asumió un Consejo de Transición con el objetivo de restablecer el orden democrático y frenar la violencia. Dicho Consejo nombró como primer ministro a Garry Conille y habilitó el ingreso al país de una Misión Militar Multinacional extranjera comandada por Kenia y respaldada por la Organización de Naciones Unidas.

Así, ocho meses después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordará su despliegue, 400 policías de Kenia aterrizaron en junio en Haití. El primer contingente que llegó a la isla caribeña, está compuesto de un total de mil policías kenianos, cuestionados en su propio país por la brutalidad de sus actos y por abusos contra los derechos humanos.



ECUADOR

En Ecuador, las protestas han sido una respuesta generalizada y variada contra las políticas del presidente Daniel Noboa Azín. Inicialmente, las medidas de seguridad, incluyendo el estado de excepción y la ayuda militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, generaron controversia y preocupación por los derechos humanos.

La situación empeoró con disturbios carcelarios violentos y la propuesta de un aumento del IVA al 15%, enfrentando resistencia significativa en la Asamblea Nacional y desencadenando protestas masivas.

Además, los acuerdos mineros de gran escala fueron criticados por comunidades indígenas, quienes reclamaron una falta de consulta adecuada y preocupaciones sobre el impacto ambiental. Un conjunto de manifestaciones en junio, en Quito, reflejaron un profundo descontento popular, particularmente sobre la quita de subsidios al combustible, destacando el malestar social y político en medio de una crisis multifacética en el país. «El FMI ordena», «NO incremento del precio de las gasolinas», «Daniel Noboa sube el IVA al 15%, sube la gasolina y la inseguridad continúa», fueron algunas de las consignas que se visualizaron el 12 de junio en Quito en la manifestación convocada por organizaciones de diferentes sectores como la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), Mujeres por el Cambio y representantes de los jubilados.

Las protestas contra las políticas gubernamentales han adoptado diversas formas, incluyendo marchas masivas en ciudades como Quito y Guayaquil con pancartas y consignas, paros sectoriales que han afectado servicios clave como transporte y educación, bloqueos de carreteras para presionar al gobierno, ocupaciones simbólicas de edificios públicos, actos de desobediencia civil como la quema de imágenes presidenciales, y debates públicos y foros donde se discuten alternativas a las políticas económicas y sociales vigentes. Estas acciones reflejan un amplio descontento popular y la búsqueda activa de cambios significativos en el país.



PERÚ

En lo que va del año, Perú ha sido escenario de una serie de eventos significativos que han agitado tanto el panorama social como político del país. Desde la conmemoración de la masacre en Juliaca ocurrida en enero de 2023, donde 18 civiles perdieron la vida durante protestas contra el gobierno, hasta las protestas en Machu Picchu por la privatización de la venta de entradas en enero de 2024, que afectaron severamente al turismo local.

En mayo de 2024, docentes y auxiliares sindicalizados realizaron un paro nacional por mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas, obteniendo compromisos parciales del gobierno. Ese mismo mes, la comunidad LGBTQ+ protestó contra un decreto gubernamental que estigmatizaba las identidades de género como problemas de salud mental, logrando su revisión y derogación durante el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Además, los conflictos mineros, como en Tía María, han generado tensiones por el impacto ambiental y social de la minería, enfrentando a defensores del desarrollo económico con detractores preocupados por la conservación y los derechos humanos.

En julio de 2024, el gobierno de Boluarte declaró estado de emergencia en San Román, Puno, tras protestas persistentes. Esto suspendió derechos constitucionales y generó críticas, impulsando llamados a un paro nacional y marchas durante las Fiestas Patrias.

En líneas generales, las manifestaciones han incluido marchas masivas en ciudades clave, paros nacionales que han afectado sectores estratégicos como la educación, bloqueos de vías y ocupaciones simbólicas de espacios públicos. Estas acciones han sido protagonizadas por diversos sectores de la sociedad, desde docentes buscando mejoras laborales hasta comunidades afectadas por proyectos mineros, reflejando una respuesta activa y variada frente a desafíos sociales, económicos y políticos en el país.



URUGUAY

El 24 de enero, el PIT-CNT, la central sindical única de Uruguay, mostró su solidaridad con los trabajadores argentinos durante el Paro General manifestándose frente a la embajada argentina en Montevideo contra medidas gubernamentales que afectan el empleo y los derechos laborales en Argentina.

Esta acción refleja su histórica solidaridad internacionalista, apoyando las luchas sociales en la región. Además, la Marcha del Silencio 2024, organizada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos el 20 de mayo en Montevideo, conmemoró a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, con la consigna "Ellos saben dónde están, exigimos respuestas" "Nunca más terrorismo de Estado". La movilización estuvo respaldada por organizaciones como Cysol, Fusilados de Soca y el PIT-CNT.

MÉXICO

El año 2024 en México ha estado condicionado por el proceso electoral que culminó el 2 de junio, dejando como resultado la victoria de Claudia Sheinbaum. Podemos observar un marco de estabilidad y crecimiento económico que repercute positivamente en la imagen del lopezobradorismo hacia el interior del país, pero que se ve teñido por la violencia política, el impacto del narcotráfico y los debates sobre la realidad de las y los migrantes en la región.

Desde septiembre de 2023 a febrero de este año hubo, según la consultora Integralia, 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas donde se encuentran implicados funcionarios, ex funcionarios, políticos, ex políticos, aspirantes a cargos de elección, familiares y víctimas colaterales.



Las calles siguen siendo escenario de disputas entre los diferentes sectores de la política mexicana. Podemos mencionar algunos de los hechos más relevantes en ese sentido.

El 18 de febrero decenas de miles de manifestantes vestidos de rosa marcharon por ciudades de México y el extranjero en lo que llamaron una “Marcha por la Democracia” en contra del partido gobernante del país antes de las elecciones del 2 de junio.



Alejandro Sánchez ✓
@AlexSanchezMx



#ULTIMAHORA !!! Ya se empieza a llenar de rosa el Zócalo de la CDMX, como parte de la Marcha por la Democracia, que se realizará en más de 100 ciudades, tanto en México como en el extranjero. El objetivo es protestar contra el autoritarismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. [#MarchaPorLaDemocracia](#) [#AMLO](#) [#NarcoPresidenteAMLO](#) [#YoSiVoyALaMarcha](#) [#YoSiVoyALaMarchaSalvemos](#)

Video: [@salgadoalelhi](#) | [@El_Universal_Mx](#)

[Translate post](#)



1:10 PM · Feb 18, 2024 · 7,999 Views

“Se disfrazan de demócratas cuando eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo, dicen, vamos a defender nuestra democracia, ¿cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta”, expresó al respecto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y agregó: “Es como el mundo al revés, ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura, ellos no tienen nada qué ver, nosotros somos los narcotraficantes”. El mandatario subrayó que García Luna, quien fue secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, fue “protegido” por muchos de los que participaron de la manifestación “y resulta que eso quieren que se olvide y yo soy el que tiene relación con el narcotráfico”, observó. Según el presidente “Cuando ellos estaban se padeció en México de un narcoestado y con pruebas no con calumnias”. Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, tuiteó: “Veo con gran felicidad el éxito de la concentración ciudadana en el Zócalo Capitalino y en más de 120 ciudades de México y el mundo. ¡La democracia se defiende en las calles y se ejerce en las urnas! ¡Que viva la participación de la ciudadanía!”.

Por otro lado, el 8M constituyó una de las movilizaciones más importantes. “Hermana, aquí está tu manada” o “Se va a caer, se va a caer, el patriarcado va a caer”, cantaban las miles de mujeres que marcharon hacia el Zócalo de la ciudad. El movimiento feminista mostró una vez más su capacidad de movilización que se hizo sentir no sólo en la capital sino en todas las localidades de México.



BRASIL

Desde la asunción de Inacio Lula Da Silva, el escenario en Brasil no ha sido sencillo, existe una polarización interna y una compleja situación política que se ve cristalizada en diferentes escenarios de lucha en la calle. Un ejemplo de esto fue la movilización en apoyo a Jair Bolsonaro en San Pablo en el mes de febrero, en un contexto marcado por las acusaciones por parte del Tribunal Supremo Federal (TSF) al ex presidente por participar del intento de golpe de Estado. La marcha de los simpatizantes bolsonaristas, que la prensa calificó como la más grande desde que asumió Lula en 2022, también alzó banderas israelíes y convocó la presencia del embajador de esa nación en Brasil. Al mismo tiempo un grupo de Diputados, encabezados por la ultraderechista Carla Zambelli, anunció que iniciaría un pedido de juicio político contra Lula, por sus declaraciones.

Otro gran hito lo representó la histórica marcha del orgullo LGBTQ+. Más de 70.000 personas llenaron el centro de la ciudad de São Paulo para celebrar la marcha del orgullo que este año invitó a “recuperar” los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, tomados como emblema por la derecha política. Bajo el lema “Basta de negligencia y retroceso en el Legislativo”, los organizadores de la tradicional manifestación hicieron un llamado a votar por candidatos alineados con los derechos de la población en las elecciones municipales que se celebrarán en octubre en Brasil.



Además, las mujeres volvieron a salir a las calles en varias oportunidades para manifestarse contra el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados ultraconservadores, varios de ellos del Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro que busca contra el proyecto de ley que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de gestación con el delito de homicidio, incluido en casos de violación.

COLOMBIA

Gustavo Petro, quien intenta avanzar con reformas sociales, enfrenta la oposición de sectores apoyados en el aparato judicial, que ha recibido apoyo de contundentes movilizaciones de calle.

El año inició con una fuerte batalla por el poder judicial. El epicentro de la tensión estuvo puesta en la votación de la Corte Suprema de Justicia para elegir una nueva fiscal general. Las organizaciones políticas y sindicales llevaron a cabo manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país, exigiendo que los magistrados de ese tribunal seleccionará a una de las abogadas ternadas por el presidente Gustavo Petro e impedir que la Fiscalía quedará interinamente en manos de la vicefiscal Martha Mancera, alineada con el fiscal saliente Francisco Barbosa, un reconocido opositor del Gobierno Nacional.



En abril, Bogotá y las principales ciudades de Colombia fueron epicentro de las movilizaciones en contra del Gobierno de Gustavo Petro, en lo que podría considerarse la jornada de movilizaciones más concurrida de las convocadas por los sectores de oposición. Y a la que salieron no sólo personalidades políticas de los partidos contrarios al presidente, sino también miles de ciudadanos del común. Los manifestantes portaron pancartas que hacían referencia a la inseguridad y violencia de los rebeldes y narcotraficantes en el campo, también se hizo una fuerte referencia a las reformas en el sistema de salud y el rechazo a un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.

Petro emitió por X un mensaje para responder a las manifestaciones que, según él, sumaron más o menos 250.000 personas en todo el país. "El principal objetivo de las marchas es gritar 'Fuera Petro' y derrocar al Gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022", declaró. A continuación, agregó: "La suerte del Gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces". El 1 de mayo el presidente llamó a los colombianos a salir a las calles, en una suerte de contramarcha.

BOLIVIA

Desde el 22 de enero de 2024, seguidores del ex presidente Evo Morales iniciaron bloqueos de caminos en Bolivia, concentrándose principalmente en Cochabamba. Estas acciones, que se mantuvieron por largo tiempo, fueron en protesta por la postergación de las elecciones judiciales y la extensión del mandato de los magistrados. Las consignas incluyeron demandas claras de "Elecciones judiciales ya" y el llamado a la renuncia de los magistrados que se auto proclamaron en sus cargos, reflejando una creciente tensión política interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno de Luis Arce.

El 26 de junio de 2024, el General Juan José Zúñiga lideró un intento de golpe militar en Bolivia, intentando tomar la sede del poder ejecutivo en la Plaza Murillo. Zúñiga y sus tropas exigieron un cambio de gabinete y la liberación de presos políticos, acusando al presidente Luis Arce de dividir al país. La Plaza Murillo, se convirtió en epicentro de la asonada golpista, donde se congregaron también los manifestantes en defensa de la democracia. Tras enfrentamientos con manifestantes pro-gobierno y recibir órdenes de retirarse, Zúñiga fue capturado. Evo Morales y Arce llamaron a la movilización social mientras la COB convocó a una huelga como medida de lucha y concientización.



PARAGUAY

En abril en Paraguay cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la principal casa de estudios superiores de Paraguay, marcharon exigiendo la derogación de la 'Ley Hambre Cero en las Escuelas', ya que esta normativa eliminó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), cuyos recursos provienen de las regalías por la cesión de energía de la hidroeléctrica de Itaipú al Brasil, el cual, además de costear la alimentación de los estudiantes, financiaba proyectos para mejorar los centros educativos o la gratuidad de aranceles en la educación superior, mejor conocido como el "Arancel Cero" (Ley 6628).



Los acontecimientos aquí narrados muestran la importancia de la lucha en las calles como validación y realización de la política. La irrupción de los sectores neo reaccionarios en el escenario callejero y en el territorio virtual, obliga a intensificar y a volver a llenar de sentido las herramientas de lucha y expresión populares. Es necesario el diseño de nuevas formas de lucha y organización para transformar el orden establecido, tener iniciativa política, velar por la integración popular de los pueblos, apelar a la creatividad y claridad en las consignas, identificando al 1% que se queda con la riqueza mundial. Tenemos una oportunidad histórica para construir un nuevo mundo, socialmente humano y económicamente justo.



**LA UNIDAD
REGIONAL EN LA
ENCRUCIJADA: LA
RESISTENCIA DE
MÉXICO, BRASIL Y
COLOMBIA**

LA UNIDAD REGIONAL EN LA ENCRUCIJADA: LA RESISTENCIA DE MÉXICO, BRASIL Y COLOMBIA

Luego de la ola de gobiernos nacionales y plurinacionales, socialistas y populares inaugurados en la región con la victoria de Hugo Chavez allá por 1998, los procesos y organismos de integración regional en América Latina y el Caribe atraviesan desde hace una década una crisis de poder frente al avance de gobiernos conservadores y neorreaccionarios en la región. Gobiernos que tienden a privilegiar acuerdos bilaterales y Tratados de Libre Comercio, abonando un estado de desarticulación, en una política fuertemente alineada a los intereses del Comando Sur liderado por la generala norteamericana Laura Richardson.

La disputa abierta entre los proyectos estratégicos comandados por Estados Unidos y China -BRICS, la Iniciativa de la Franja y la Ruta- y su influencia en las dinámicas geopolíticas en América Latina y el Caribe, tensiona el papel que juegan los mecanismos regionales como espacios de diálogo y concertación.

La polarización y radicalización política se profundiza en las patrias chicas, obstaculizando el desarrollo y la coordinación de política soberana a escala regional. Los acuerdos y tratados bilaterales debilitan la capacidad de los países para mejorar sus condiciones en las negociaciones e imponer sus propios intereses.

El vaciamiento en estos años de la UNASUR es tal vez el ejemplo más paradigmático del cambio en las correlaciones de fuerzas regionales. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador, se retiraron del bloque (algunos transitoriamente), debilitando significativamente su poder de coordinación y maniobra en la resolución de los asuntos nuestroamericanos. La CELAC por su parte, celebró el retorno de Brasil en 2023, luego de la reticencia del gobierno bolsonarista, pero cierra el semestre expresando la marcada contradicción que opera en su interior, entre modelos de política exterior y proyectos de región.

Ejemplos de la desarticulación regional que se impone fueron la inconciliable postura sobre el genocidio palestino en marzo, o el desconocimiento público de la II Cumbre de la CELAC Social, por parte de Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los últimos días de junio.



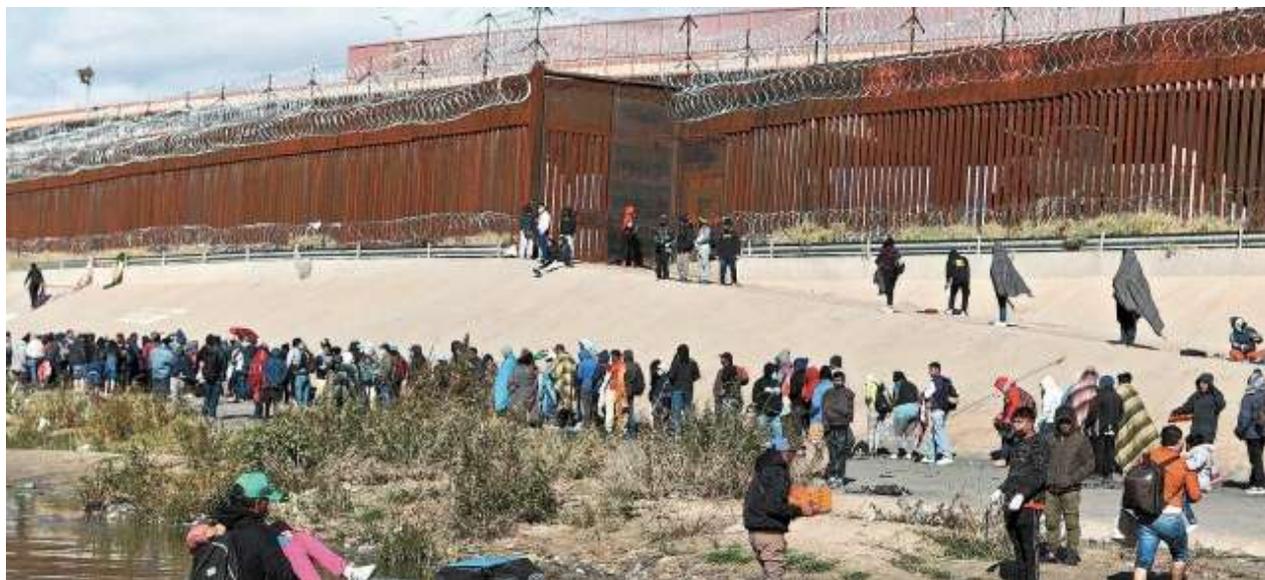
MÉXICO: FRONTERA AL ROJO

México finaliza estos seis últimos meses del sexenio de Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) al frente del Ejecutivo, entre victorias electorales que garantizan la continuidad del proyecto de Cuarta Transformación (4T) iniciado por el líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y conflictos diplomáticos con Ecuador y fronterizos con su principal socio comercial de este año, Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, la presidenta electa con amplia mayoría popular, ha asegurado la adhesión a la política exterior integracionista, de “izquierdas” llevada hasta el momento, afirmando que “hay que mirar al sur, puesto que no solo se trata de la relación con Estados Unidos como socios comerciales, también con las otras naciones del continente con quien hay que mantener la colaboración, amistad y respeto, como iguales” y descartó reanudar relaciones con Ecuador, mientras el gobierno de ese país no cumpla con la demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La relación con Estados Unidos, su principal socio comercial, comprende no solo balanzas comerciales sino también, grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos para el vecino del norte. Luego de su reunión a mediados de junio con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para Seguridad Nacional de Joe Biden, afirmó que continuará rigiendo su política bajo el Entendimiento Bicentenario, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la frontera compartida continúa profundizandose un conflicto histórico: la creciente migración de latinoamericanos hacia EEUU, pasando por México. En enero de este año Biden aseguró que cerraría la frontera si el Congreso le otorgaba la autoridad para hacerlo, aprobando un proyecto legislativo que senadores demócratas y republicanos venían negociando. Afirmó durante una entrevista televisiva que se trataba del “proyecto de seguridad fronteriza más duro e inteligente de la historia”.



En ese contexto, el demócrata candidato a la reelección en noviembre de este año, el 04 de junio presentó una serie de medidas para frenar las solicitudes de asilo y evitar un aumento de los cruces fronterizos, con la suspensión de las solicitudes a partir de los 2 mil 500 encuentros fronterizos al día. El anuncio, resistido por su homólogo mexicano, implica la expulsión de los migrantes en algunos casos en cuestión de horas o días, dependiendo del país de origen. Estados Unidos ya realiza vuelos de repatriación a algunos países, entre ellos India pero no corren la misma suerte los ciudadanos mexicanos, así como los procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos a México.

En lo que sí estuvo de acuerdo el gobierno mexicano fue el plan propuesto a finales de junio por Biden, para regularizar por tres años a migrantes casados con estadounidenses que cumplan con ciertos criterios de aplicación. Unos 50 mil hijos menores de 21 años con un progenitor con ciudadanía estadounidense también se contemplan en la medida. El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde el 2012 cuando Barack Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permitió a más de 800 mil migrantes obtener permisos de trabajo y protección frente a la deportación.



AMLO afirmó: “Nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte de Estados Unidos, que se llegue a un buen acuerdo con (países como) Cuba” y consideró que el tema migratorio es usado con propósitos políticos electorales.

El gobierno de la 4T tensiona sobre el norteamericano por mejorar las condiciones de vida de la comunidad mexicana residente en ese país con sobrada razón. Conforman la mayoría de la población latina votante, pero además desempeñan un papel central en la economía de Estados Unidos. Entre los trabajadores informales con residencia regularizada en el país se cuentan 5.3 millones de mexicanas y mexicanos.

Según datos brindados por la canciller Alicia Barcena, en los censos de población en EUA en los primeros veinte años del siglo XXI, las personas de origen mexicano aumentaron en casi 80% pasando de 20.9 millones en 2000 a 37.4 millones en 2024. Esto representa el 11.2% de la población estadounidense y poco más del 60% de la llamada “población hispana” en ese país. La media de edad, de acuerdo con el Pew Research Center, es de 27.9 años, que es mucho menor a la media general de la población estadounidense de 37.8 años. Así, la población de origen mexicano en EUA integra en buena medida el bono demográfico. En 2023, se contabilizaron 18 millones de personas (7.6 millones de mujeres) de origen mexicano que son trabajadores activos distribuidos en todos los sectores de la economía estadounidense, especialmente en la construcción, la agricultura y los servicios básicos y según las proyecciones del Departamento de Trabajo de EUA, los trabajadores hispanos en ese país aumentarán a 35.9 millones en 2030 y representarán el 78% de los nuevos trabajadores, a bajo costo salarial para el empresariado.



En materia comercial -la principal relación que le interesa cuidar a ambas administraciones y los sectores empresariales de uno y otro lado de la frontera- en abril el Departamento de Estado norteamericano anunció una asociación estratégica con el gobierno de México para explorar oportunidades de crecimiento y diversificación de la cadena de suministro de semiconductores, a fin de reducir su dependencia del mercado asiático, particularmente de China y Taiwán. Amparado en la Ley Chips de 2022, Estados Unidos creó el Fondo ITSI, que proporciona al Departamento de Estado 500 millones de dólares (100 millones anuales durante cinco años, a partir del año fiscal 2023) a tal fin y México será un socio muy importante, por su cercanía.

En junio, además, luego de una conversación telefónica entre los mandatarios de ambos países, se celebró el anuncio de la construcción de un puente fronterizo Matamoros, en el estado de Tamaulipas, y en Piedras Negras, Coahuila, además de ampliar el puente 'Comercio Mundial' de Nuevo Laredo, por donde pasa el 40 % del comercio binacional.

La buena noticia es que finalizan los últimos seis meses del gobierno de Lopez Obrador y lo que será recordado como el “primer piso” de la Cuarta Transformación, plataforma política del lopezobradorismo (Morena), el partido verde ecologista de México y el Partido del Trabajo, con la victoria rotunda del 60% de los votos de Claudia Sheinbaum. La primera presidenta del país recibió felicitaciones de sus proximas homologas y homologos en la region: Rodrigo Chaves (Costa Rica), Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras), Bernardo Arévalo de León (Guatemala), John Briceño (Belice), Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Luis Arce (Bolivia), entre otros y prometió continuar construyendo el “segundo piso” de la 4T, el proyecto ratificado por el pueblo en las urnas.

LULA, AL RUEDO

En medio de un panorama internacional convulso, Brasil vuelve a emerger como un impulsor de la multilateralidad, desplegando el rol de mediador regional y garante de la gobernabilidad global. La segunda economía de latinoamérica es un jugador de todo el tablero que bajo la dirección del presidente Lula da Silva, despliega en política exterior un enfoque caracterizado por la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y la búsqueda de la cooperación internacional.

En la última cumbre del G7, entre el 13 y el 15 de junio en Italia, Lula volvió a asistir como presidente invitado y presidente del G20. Se trata de su octava participación en el evento, luego de las seis primeras que tuvieron lugar durante sus dos primeros mandatos. Brasil no había asistido a una reunión del grupo desde entonces. La séptima participación del mandatario brasileño fue el año pasado, en la cumbre de Hiroshima, Japón.



En la ciudad de Borgo Egnazia, el mandatario no perdió oportunidad para impulsar un impuesto a los superricos y abogar por una gobernanza internacional e intergubernamental para la inteligencia artificial, en la que todos los Estados tengan un lugar. "Liderar una revolución digital inclusiva y enfrentar el cambio climático son dilemas existenciales de nuestro tiempo. Necesitamos abordar esta doble transición centrada en la dignidad humana, la salud del planeta y la responsabilidad hacia las generaciones futuras", afirmó.

Del encuentro participaron además de los mandatarios del grupo, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, además de exponentes de organismos mundiales como la Unión Europea, ONU y OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Papa Francisco ya que la guerra en Ucrania atravesó la agenda del evento.

En el escenario regional de estos primeros seis meses del año, Brasil medió el proceso de negociación entre Venezuela y Guyana, por el Esequibo "una región que contiene una rica zona marítima, petrolera, minera y forestal sobre la que pusieron su mira el Comando Sur norteamericano y la petrolera Exxon Mobil y ha sido el epicentro de una disputa territorial desde hace más de 180 años". Desde Brasilia la Comisión Conjunta de los Cancilleres y Técnicos de Venezuela y Guyana, acompañados por representantes de los gobiernos de Brasil, San Vicente y las Granadinas y Dominica emitieron una Declaración cuestionando aspectos de la Declaración de Argyle, siendo de vital importancia la desincorporación de terceras partes en la disyuntiva, como el Comando Sur de Estados Unidos o el Reino Unido.



En relación a la elección presidencial del 28 de julio se sostuvo el apoyo brasileño a los Acuerdos de Barbados, que el año pasado sentaron las bases para unas elecciones transparentes y libres. Impulsó el levantamiento de medidas unilaterales contra Venezuela para contribuir al clima democrático del proceso electoral.

Por su parte, la relación bilateral con Argentina se encuentra en uno de sus peores momentos del siglo. Lula sostiene que el presidente Javier Milei debe pedirle disculpas a Brasil y a él, por sus dichos en su contra. Y aseguró que “no es el presidente de la República quien creará una cizaña entre Brasil y Argentina. El pueblo argentino y el brasileño es mayor que los presidentes”. Milei asegura que no tiene razones para disculparse y en su lugar, se reunió más de una vez con el ex presidente Jair Bolsonaro, sus equipos de trabajo y allegados.

Mientras, la Justicia brasileña investiga a los autores intelectuales y materiales del intento de golpe de estado a principios del 2023, a tan solo días de la asunción presidencial de Lula, por el que en la actualidad, más de 60 posibles implicados han solicitado asilo político al gobierno argentino.

Las relaciones entre Brasil y EEUU mejoraron sustancialmente cuando llegó Lula al poder, ya que, si bien el estrecho vínculo comercial que mantienen no se vió interrumpido durante el gobierno bolsonarista, los vínculos se enfriaron ante la divergencia de posturas en amplios temas y la manifiesta cercanía de Donald Trump con Jair Bolsonaro.

Además, y en un claro ejemplo del poderío de las tecnológicas, se desató un conflicto entre Alexandre de Moraes, Juez del Tribunal Supremo y uno de los aristócratas preferidos de Milei, el empresario Elon Musk. El dueño de X, Testa y Starlink acusó al magistrado de “censura” y pidió su renuncia en la investigación, luego del pedido de anulación de cuentas utilizadas para la agitación violenta de seguidores bolsonaristas por esos días.

ARGENTINA A CONTRAMANO

Desde su llegada al poder el 10 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha marcado un rumbo polémico en materia de política exterior, caracterizado por un enfoque enérgico hacia la defensa de la antipolítica, el anarco capitalismo, el libre mercado y la protección de la propiedad privada, ante cualquier cosa.



El presidente argentino ha realizado ocho visitas oficiales al extranjero: cinco a Estados Unidos y ninguna a países vecinos. Con claridad el gobierno ha explicitado que sus dos principales socios internacionales son EE.UU. e Israel, llegando a establecer un “comité de urgencia” en Argentina para brindar su apoyo al gobierno de Netanyahu.

En febrero, hizo su primera visita extranjera -tras su breve paso por Davos-, al país, incluso a pesar de que Israel estaba en guerra. Desde allí, confirmó que planea mudar la embajada argentina a Jerusalén occidental, siguiendo los pasos de Donald Trump, quien en 2018 hizo lo propio con la embajada estadounidense.

El compromiso con Washington ha sido completamente inquebrantable. Cuando se le preguntó sobre su relación con Trump, quien este año se postula para la presidencia en contra del actual mandatario, Joe Biden, Milei afirmó: "Sin importar quién gane, yo soy aliado de Estados Unidos, ya sea demócrata o republicano".



En febrero Javier Milei participó en un encuentro con el expresidente Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cuyo lema fue “Donde el globalismo va a morir”, estableciendo alianzas con movimientos neoconservadores a nivel global, ante la presencia de líderes como Nayib Bukele, Nigel Farage, Santiago Abascal y Steve Bannon.

Casi en paralelo se llevó adelante la visita del secretario de Estado norteamericano a la Argentina, Antony Blinken. Allí se discutieron temas claves en relación a garantizar la liberación del comercio y la explotación y entrega del litio y el agua dulce, ya comprometidos en la gira por Israel del presidente argentino.

Desde el inicio del mandato, la canciller Diana Mondino, pone en agenda el avance en el proceso de incorporación de Argentina a la OCDE como principal interés, solicitando el expreso apoyo de los países que hoy son parte del organismo. Está claro además, por comunicaciones oficiales, que la suspendida firma del Acuerdo Mercosur - UE, sigue siendo una prioridad para el Gobierno argentino, abriendo además el bloque a acuerdos con nuevos socios y buscando fortalecer la alianza con Uruguay en este sentido.

Un hecho no menor que pareciera escapar de las agendas mediáticas, es la definición del actual gobierno de Argentina como nicho global de startups tecnológicas, sin regulación estatal y bajo el modelo internacional imperante que conjuga la extrema financiarización con la digitalización de la economía “del conocimiento” y la destrucción de las relaciones contractuales y los derechos laborales.

No se trata sólo de retomar las “relaciones carnales” con el país del norte, distanciándose de los BRICS, sino de un claro plan de entrega y privatización de las principales empresas estatales y los recursos estratégicos nacionales, mediante la apertura indiscriminada de inversiones extranjeras que condena a la Argentina a proveer materias primas - alimenticias y energéticas, principalmente- sin agregado de valor en origen.

El conflicto más reciente tuvo lugar con España, a la que visitó a finales de mayo en un viaje principalmente privado con el propósito principal de dar un discurso en un evento organizado por el partido de ultraderecha español Vox.

Así, lo que en apariencia puede observarse como una desconexión progresiva del mundo, por el rechazo al ingreso al potente BRICS y el desdén oficial por mecanismos como la CELAC o la UNASUR, a poco rascar, se encuentra que en lugar de abonar a la política internacional de cooperación sur-sur, el gobierno argentino ha marcado rápidamente una agenda de prioridades en otro sentido y con otra perspectiva, alejada del crecimiento económico con distribución y el aprovechamiento soberano de las riquezas nacionales.

CELAC Y CELAC SOCIAL

En un repaso general por la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en marzo se celebró en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, la VIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, con la notable ausencia de los mandatarios de Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay.



Los debates no estuvieron exentos de desacuerdos y controversias. La única referencia en la declaración final al conflicto por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, fue la ratificación del acuerdo alcanzado en diciembre del 2023 entre los presidentes Maduro y Alí apostando por la resolución pacífica de la disputa territorial.

El mensaje en torno al genocidio palestino fue irreconciliable. Sin consenso, se emitió un comunicado firmado por 24 de los 33 países del bloque. El alto al fuego sionista sobre la población civil y el reconocimiento del Estado Palestino fue respaldado, entre otros, por Brasil, Colombia, Venezuela, México, Honduras y Nicaragua. Muchos otros, optaron por una imposible neutralidad o apostaron al discurso de una guerra entre iguales. La grieta entre proyectos y sus alineamientos está a la vista y el pretendido consenso, se aleja cada vez más en el horizonte geopolítico.



A mediados de abril, en carácter de urgente, la presidenta hondureña Xiomara Castro en ejercicio de la presidencia pro tempore, convocó a la Cumbre Virtual Extraordinaria de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac para tratar la crisis diplomática entre Ecuador y México, tras la invasión a su embajada en Quito. Allí, el repudio fue generalizado y el gobierno mexicano apeló a sumar adhesiones formales. A su turno, el presidente López Obrador dijo a los participantes “Agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe. Y queremos, también, proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el tribunal de justicia internacional” recordando además, que se había solicitado la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas.



En junio fue la convocatoria en Tegucigalpa, Honduras, de la II Cumbre de la CELAC Social. El espacio inaugurado en la cumbre anterior de Jefes y Jefas de Estado en enero del 2023 (a la que el presidente Nicolás Maduro no pudo asistir por amenazas de conflicto, azuzadas por la derecha argentina), forma parte de la construcción de los lazos y redes que la Patria Grande necesita para enfrentar los intentos desestabilizadores de las derechas y defender los acuerdos y reglas democráticas, por subordinadas que estén al poderío corporativo. Entre el 27 y 29 de ese mes, con la presencia de más de 400 organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región, esta II Cumbre tuvo lugar en simultáneo con el XXVII Encuentro del Foro Sao Paulo y reuniones del Grupo de Puebla y la Internacional Progresista.

Fue la oportunidad de poner la centralidad del debate en torno a la necesidad de consolidar a la región en una zona de paz, detener el avance de los proyectos neorreaccionarios y defender los procesos políticos y sociales progresistas, dentro y fuera de la órbita estatal, repudiando el intento de golpe de estado en Bolivia contra Luis Arce.



Participaron, entre otros, la presidenta Xiomara Castro y el expresidente hondureño Manuel Zelaya, el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras y coordinador de la presidencia pro tempore de la Celac, Gerardo Torres, Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Rander Peña, viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela; Iván González, coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Emilio Lozada, del Partido Comunista de Cuba; Jorge Coronado de Latindad, Pedro Silva de la Fundación Perseu Abramo (PT Brasil), Carlos Ron, Viceministro venezolano para América del Norte, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y Jorge Arreaza, Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP. Vicepresidente del PSUV para Consejos Comunales y Comunas.

La reacción no tardó en llegar y apenas se conoció la declaración final de la Cumbre social, salió a la luz pública un comunicado firmado por Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, afirmando que “No existe dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) un segmento, programa ni iniciativa denominada ‘Celac Social’, por lo que ninguna manifestación divulgada bajo ese nombre representa una comunicación oficial de la Celac” en un intento de deslegitimar el espacio de integración que supera y amplía la dimensión interestatal del bloque.

LA DIMENSIÓN DIPLOMÁTICA DE LA GUERRA MULTIDIMENSIONAL

La región se vio sacudida por un conflicto diplomático sin precedentes. Miles de imágenes y videos de la detención violenta y arbitraria del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en manos de las fuerzas de seguridad, recorrieron el mundo a través de redes sociales y noticieros.



La gravedad reside en la violación del asilo político del que gozaba el ex funcionario en la Embajada mexicana en Quito y de los tratados internacionales en la materia, lo que significa un profundo retroceso democrático para la región. “No se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional como se hizo en el caso de Ecuador porque entonces sería ‘la ley del más fuerte’, ‘del mundo de los gorilas’, ya lo he dicho, con todo respeto a los gorilas” afirmó AMLO por esos días en una de sus conferencias matutinas.

El 6 de abril por la madrugada, efectivos de la policía ecuatoriana entraron a la embajada de México en Ecuador a la fuerza, apuntaron con armas de fuego al personal y se llevaron a rastras al ex vicepresidente Jorge Glas, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), acusado y enjuiciado por supuesta corrupción.

Como antesala al ataque, el día anterior el gobierno ecuatoriano a cargo de Daniel Noboa había declarado “persona non grata” a la embajadora de México Raquel Serur Smeke. El sucesor de Lasso reaccionó a la denuncia de AMLO sobre el uso político del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, contra la fórmula correista antes del ballottage en Ecuador, en el que Noboa finalmente se impuso a mediados de octubre.

Esa madrugada las cámaras de seguridad registraron el asalto: mientras militares custodiaban la zona, policías treparon paredes y saltaron vallas para ingresar a la embajada. Luego empuñaron sus armas y agredieron al jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos, Roberto Canseco, quien intentó detener el accionar policial sin éxito.



El 10 de abril el presidente mexicano dio a conocer un video de la irrupción de la embajada que fue captado desde el interior de la sede diplomática y en él se vió cómo Roberto Canseco, jefe de la cancillería, intentó evitar el avance de agentes ecuatorianos para que apresaran arbitrariamente al ex vicepresidente Jorge Glas. El gobierno de Noboa desmintió públicamente el uso indebido de la fuerza y argumentó la medida como parte de la “lucha contra la corrupción” en el país, que atraviesa una grave crisis social y económica.

De allí que México llegara rápidamente a las instancias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 11 de abril y tuviera el apoyo de la Cumbre Virtual Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC convocada por Xiomara Castro, cuatro días después. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, aseguró Lopez Obrador a la comunidad internacional, agregando que “Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias”, “México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero” sentenció una vez más.



AMLO recibió rápidamente el amplio apoyo de la región y recriminó la tibieza de Canadá y Estados Unidos ante el ataque. Primeramente se manifestaron los gobiernos de Nicaragua (que suspendió sus relaciones diplomáticas con Ecuador), Venezuela (cerró sus sedes diplomáticas en Ecuador), Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Guatemala, Honduras, Cuba, Chile, Brasil, Paraguay; Antigua y Barbuda, Argentina y San Vicente y las Granadinas.

Se sumaron luego el ministerio de Asuntos Globales de Canadá, a cargo de Melanie Joly, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea.

Después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, anunciada en el Comunicado No. 128 de la Cancillería mexicana y frente a la falta de reconocimiento del ataque por parte de Noboa, el gobierno solicitó la expulsión de Ecuador de la ONU hasta que el gobierno emitiera algún tipo de disculpa. Llegaron las dos audiencias ante la CIJ los días 30 de abril y 1 de mayo cuando las partes se presentaron en la Corte de La Haya, que finalmente desestimó las medidas provisionales solicitadas por el gobierno de México contra Ecuador, argumentando falta de pruebas.

CRIMEN ORGANIZADO Y FRONTERAS EN CONFLICTO



El presidente de Chile Gabriel Boric anunció el jueves 11 de abril la decisión de “llamar a consulta” a Jaime Gazmuri, su embajador en Venezuela, debido a las tensiones entre el Ejecutivo y el gobierno venezolano sobre la organización criminal “Tren de Aragua” que caldean la relación hace ya algunos meses. La Justicia chilena investigó y enjuició por esos días a Los Gallegos, la banda protagonista de lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.

A los 38 acusados, 34 fueron venezolanos y cuatro chilenos, se les adjudicó la causa de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas. Considerados parte de una célula del Tren de Aragua, una supuesta mega banda venezolana que ocupa Chile como un importante centro de operaciones, el más grande después de Venezuela, según fuentes policiales chilenas.

El canciller venezolano, Yvan Gil, negó la existencia de tal organización criminal transnacional “Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”, dijo el ministro públicamente. En respuesta el presidente chileno recriminó al gobierno bolivariano no sólo una “falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado”. Y escaló la tensión asegurando que la definición de Venezuela constituye un insulto también a los Estados que han sido “víctimas” del Tren de Aragua. Así, denunció la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano con los países del sur, y afirmó que el gobierno de Maduro sí colabora con Estados Unidos al aceptar expulsiones desde ese país.

La última semana de junio la justicia chilena condenó a cuatro de los acusados a 99 años de cárcel entre todos y a prisión perpetua para el líder local por los cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos, según informó la fiscalía. Las mujeres eran captadas en Venezuela y Colombia e introducidas a Chile de forma irregular por pasos no habilitados para luego trasladarlas al sur del país.

No parece casual que desde las esferas mediáticas se relacione al Tren de Aragua con el secuestro y asesinato del ex militar disidente venezolano Ronald Ojeda en suelo chileno a fines de febrero de 2024.

La paradoja gatopardista de “cambiar todo para que nada cambie” pareciera representar mucho de lo sucedido en Chile con el mandato de Boric, donde el presidente que venía a transformar la estructura del país terminó siendo un representante de un proceso de restauración del orden de la mano de una suerte de nueva concertación, hacia el interior del país. Y en política exterior, actúa como una suerte de péndulo socialdemócrata que juega en contra de procesos políticos soberanos como el venezolano o el nicaragüense, mientras se alinea al gobierno peruano a cargo de Dina Boluarte, golpe de Estado a Pedro Castillo mediante.

SOLIDARIDAD CON PALESTINA: UNA CAUSA REGIONAL

Estos primeros seis meses del año culminan con una causa diplomática que enlaza a la gran mayoría de los Estados de Latinoamérica y el Caribe, una región que sabe por su propia historia de genocidios y no titubea en solidarizarse con los pueblos asediados.



En este sentido, el año comenzó con el apoyo de diversos gobiernos a la demanda contra Israel presentada por Sudáfrica a fines del año 2023 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entre ellos se encontraron los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Chile.

La sostenida condena del conflicto en la Franja de Gaza por parte de Lula refleja, no solo una postura firme ante la violencia y el sufrimiento de la población civil, sino también un compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional.

Sus llamamientos a un alto el fuego y su apoyo a la creación de un Estado Palestino recibieron en febrero amplio apoyo del G20, durante el encuentro de cancilleres que se realizó en Río de Janeiro. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea; Espen Barth Eide, ministro noruego de Relaciones Exteriores y Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense fueron algunos de los que se sumaron a una solución a largo plazo. La respuesta de Tel Aviv no tardó en llegar declarando al presidente brasileño “persona non grata” para el estado israeli, por haber comparado el genocidio palestino con el Holocausto nazi.



“Ya no hay excusas para impedir que Palestina se una a la ONU como miembro de pleno derecho”. “Las operaciones terrestres en la región de Rafah, ya superpoblada, presagian nuevas calamidades y son contrarias al espíritu de las medidas cautelares de la Corte (Internacional de Justicia). Es urgente poner fin a la matanza. La posición del Brasil es clara”, había dicho el líder del PT ante una reunión de la Liga Árabe, tras reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, por esos días. Solicitó además que los países continuaran contribuyendo con recursos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) luego de que Estados Unidos cortara su financiamiento a la agencia. Los presidentes Gustavo Petro y Luis Arce respaldaron a Lula, mientras Argentina se posicionó a favor de Israel.

Fue el recrudecimiento del asedio a Palestina con el ataque al campamento de refugiados en Rafah a fines de junio, lo que avivó la condena de Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, México, Honduras, Bolivia y Chile. Desde el inicio del conflicto bélico más de 37.400 gazatíes fueron asesinados y unos 85.600 resultaron heridos según la cartera de Sanidad de la Franja. En la trayectoria del conflicto destaca la solicitud a la ONU del ingreso de Palestina como miembro pleno del organismo, cuando a fines del mes de marzo 24 de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) suscribieron una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que solicitaron el reconocimiento del Estado palestino como miembro de pleno derecho, la misma fue suscrita por la presidenta de Honduras y actual presidenta pro tempore de ese bloque, Xiomara Castro.

El envío de la mencionada carta fue el puntapié para una serie de acciones en las que los Estados de la región profundizaron el pedido a lo largo del mes de abril, con sostenidas declaraciones del canciller de Brasil, Mauro Vieira, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Kerrie Symmonds, la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, el Gobierno de Nicaragua, la XXIII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y el gobierno de México a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores.



Por las presiones internacionales sostenidas, el 10 de mayo se aprobó una Resolución en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgándole a Palestina una mayor participación en ese órgano, pero lejos del reconocimiento de su soberanía territorial. La tibia concesión siguió al veto emitido por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad el 18 de abril, que bloqueó la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho de la ONU.

A sabiendas de que las declaraciones y nombramientos no son suficientes, mientras el genocidio al pueblo palestino se recrudecía ante los ojos del mundo, algunos gobiernos de la región decidieron implementar medidas contundentes, desde el retiro de sus Embajadores de Israel, hasta el desarrollo de políticas de ayuda humanitaria para los civiles.

En tal dirección, a principios del mes de mayo, el presidente de Colombia -otro de los mandatarios que junto a Lula tomaron el frente de denuncia- rompió relaciones diplomáticas con Israel, ordenando semanas después la instalación de una embajada colombiana en el territorio palestino de Ramala. Lo mismo hizo su homólogo brasileño el 30 de mayo retirando de manera definitiva al embajador brasileño en el país, sin designar un reemplazo y dejando la embajada a cargo del jefe de negocios.

En mayo también Gustavo Petro puso en marcha “un servicio de atención a niños palestinos heridos por los bombardeos”. Los mismos pasos siguió el gobierno de Bolivia que a mediados de mes denunció a través de Celinda Sosa, ministra de Relaciones Exteriores, que Israel impedía la entrega de 90 toneladas de ayuda humanitaria que envió su país a Gaza.

El 11 de junio, profundizando su posicionamiento, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, anunció un programa de asistencia humanitaria para Gaza, enfocado en ayudar principalmente a niños y mujeres quienes son las principales víctimas del genocidio en curso. Una acción valorada públicamente por el asesor de asuntos internacionales de Palestina, Riad Malki. El mundo y la región no deben desestimar ni un solo día, que el imperialismo no titubea, arrasa con lo que se interponga a sus elitistas intereses. De allí, la importancia vital de los mandatarios y mandatariaa progresistas que levantan su voz en espacios y organismos supranacionales, como la valiosa movilización latinoamericana diversa y popular, en solidaridad con el pueblo palestino.



Atravesamos tiempos turbulentos en la reconfiguración del orden global. Focos de la guerra tradicional, híbrida y de carácter multidimensional pintan el mapa. En nuestra región, los estados de sitio y las declaraciones de guerra interna contra el narcotráfico se vienen imponiendo desde los gobiernos neoconservadores, que avanzan alineados al proyecto estratégico angloamericano y sionista. Si bien Israel mantiene relaciones diplomáticas plenas con casi todos los países de Centro y Sudamérica y de la región del Caribe, se volvió evidente el aumento de los enfrentamientos diplomáticos con ese país, proliferando los llamados a consultas de embajadores, cierres de Embajadas y los reclamos en instancias internacionales.

El sionismo es hoy una de las terminales políticas de gobiernos latinoamericanos de la ultraderecha. Elementos sionistas emergen en los entramados institucionales de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Paraguay, así como en las fuerzas sociales y políticas que sostienen los proyectos del bolsonarismo en Brasil y del pinochetismo “democrático” en Chile. Esta ideología política, surgida a fines del siglo XIX en el auge del nacionalismo europeo, devino en un proyecto político en América Latina que juega como un promotor de la desarticulación regional latinoamericana. No tanto por lo que promueve el Estado de Israel en la región, como por lo que los actores sionistas locales impulsan en las agendas políticas domésticas. Esto abre la necesidad de visualizar con mayor nitidez sus actores, sus posiciones, sus mecanismos, y su red de influencia en el arco político, económico y estratégico latinoamericano y caribeño.



La situación general que profundiza las condiciones para la militarización de la sociedad civil y la ruptura de los acuerdos democráticos, tanto en materia nacional como internacional debe preocuparnos. La pregunta es si será Nuestramérica tierra fértil para abonar el aumento de las tensiones bélicas y la desarticulación política o se fortalecerá un bloque o sub-bloques regionales que apuesten insistentemente por la paz. El camino es el emprendido por las posiciones diplomáticas de México, Honduras, Brasil, Venezuela, Cuba y Colombia. Con sus propios pesos específicos, estos países resguardan los procesos de integración y unidad continental, mientras rechazan ante la comunidad internacional la injerencia extranjera y la escalada en el conflicto armado internacional, con epicentro hoy en Medio Oriente.



**ESTADO
POLICÍACO
PARA EL
CONTROL DE LOS
TERRITORIOS**

ESTADO POLICÍACO PARA EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS

Según datos de *Statista*, en el año 2024 “Latinoamérica cuenta con un 29% de personas bajo la línea de la pobreza y aproximadamente un 11,2% debajo de la línea de pobreza extrema”. Frente al incremento de la desigualdad y la violencia que esto genera, gobiernos de la región como Argentina, El Salvador y Ecuador ensayan respuestas bajo la consolidación de un modelo de securitización, basado en la doctrina antiterrorista que rige la política exterior de EEUU hacia América Latina.

Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, avanza con la desregulación de la economía y el desmantelamiento estatal, a partir de un dispositivo de disciplinamiento social, que involucra la criminalización de referentes sociales, políticos y de derechos humanos, la estigmatización sobre las mujeres y las diversidades sexuales y la implementación del ciberpatrullaje, como muestra clara de su comprensión sobre de las redes sociales como un territorio donde se produce poder, en tiempos de transición hacia la fase digitalizada del capitalismo.

Mientras tanto, Nayib Bukele en El Salvador, en su ya segundo mandato y con el eje de la seguridad como “caballito de batalla”, profundiza su plan de control territorial a través la reestructuración de las fuerzas de seguridad, la creación de una mega cárcel y la construcción de un relato que espectaculariza y convierte en hitos cada paso de su plan de seguridad, difundido en redes sociales y medios de comunicación.



El Salvador y Ecuador coinciden en los métodos para hacer efectivas sus propuestas de seguridad: el estado de excepción. Tras utilizar este recurso por el transcurso de dos años consecutivos el gobierno salvadoreño ha sido denunciado por Amnistía Internacional por las repetidas violaciones a los derechos humanos que esta suspensión de garantías constitucionales produce. Según la organización, hasta febrero de 2024 ya se habían identificado 327 casos de desapariciones forzadas, 78.000 detenciones arbitrarias, 102 mil personas privadas de libertad, hacinamiento carcelario del 148% y al menos 235 personas muertas bajo custodia estatal.

 **La Jornada Tlaxcala** @JOrienteTlax · Jul 18
#Internacional | Más de 3 mil niños arrestados en el Salvador durante estado de excepción de #Bukele, alerta Human Rights Watch (@hrw_espanol)



Mientras, la pobreza extrema se incrementa. Así lo expone el Banco Mundial en un informe sobre el país, en el que destaca que, en comparación con los valores previos a la Pandemia, El Salvador ha logrado mantener estable el porcentaje de pobreza, pero no así el porcentaje de pobreza extrema que aumentó en 4,1%. Además, de acuerdo con lo informado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en 2023, Bukele ha disminuido el déficit fiscal, a fuerza de ajustes en Educación, Salud y Obras Públicas.



Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa, avanza intentando igualar a Bukele. En enero de este año, luego de episodios de violencia donde grupos armados tomaron un canal de noticias y la Universidad de Guayaquil, Ecuador aplicó el estado de excepción a escala nacional y denunció a 22 organizaciones ligadas al narcotráfico como grupos terroristas. Por supuesto el Comando Sur estadounidense no se hizo esperar para intervenir. Del 22 al 26 de enero Ecuador recibió la visita de Laura J. Richardson y la entrega de más de 20.000 chalecos antibalas y más de USD 1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, incluyendo ambulancias, camiones, montacargas, motores para embarcaciones y vehículos de apoyo logístico de defensa.



Camarada Fibrik  @Fibrik_Oficial · Jan 9

El presidente ecuatoriano **anuncia** que el país va a adoptar el modelo **Bukele** para combatir el crimen, con efecto inmediato. **Estado de excepción** declarado.



 26

 327

 2.1K

 53K

Como contracara, Honduras ha mostrado otras estrategias para abordar este problema, en un país donde la violencia se presenta como variable cotidiana de un enquistado “narcoestado” que, desde el golpe de estado a Manuel Zelaya en 2009, no hizo más que profundizarse. Recordemos que el ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue acusado por tráfico de drogas y armas de fuego y en febrero de 2022 extraditado a EEUU.

En ese marco la actual presidenta, Xiomara Castro, también ha acudido al estado de excepción parcial como política para frenar asonadas violentas. Sin embargo, la política de seguridad de Castro le otorgó un lugar importante a las organizaciones de Derechos Humanos y comunitarias, quienes emitieron recomendaciones para la actuación policial desde una perspectiva de respeto y promoción de los derechos humanos. En 2022, Honduras cerró el año con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100,000 habitantes, la más baja en 17 años.



Haití no ha quedado exento del intervencionismo estadounidense en su conflicto por la transición del gobierno. Fue el secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, quién le reclamó al ex presidente haitiano Henry que iniciara una transición urgente hacia “un gobierno más amplio e inclusivo”, en medio de las conversaciones y rondas de conformación del gobierno de transición en un territorio con grandes conflictos con las bandas armadas y criminales. En enero, el país sufrió el mes más violento en dos años, con más de 1.100 personas afectadas por asesinatos, lesiones o secuestros relacionados con la violencia de las pandillas. La ONU contabilizó más de 500 mil personas desplazadas por esta razón en junio. Esta situación ha generado protestas antigubernamentales en al menos 24 ciudades, y las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.



Desde el mes de marzo los gobiernos de Estados Unidos, Kenia y El Salvador ya ofrecían su ayuda con el objetivo de “estabilizar la situación”. Distintas bandas armadas ejercen el control territorial en Haití. La más conocida es el G9, liderada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien se manifestó en contra de una intervención extranjera y se presentó al frente de una coalición armada de hombres en “batalla para liberar (al país) de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos”. Chérizier pidió a la comunidad internacional una oportunidad para que el pueblo haitiano pueda tomar sus propias decisiones.

Para junio de 2024, el país recibió más de 400 policías kenianos, 360 millones de dólares por parte de Estados Unidos y la celebración de Joe Biden por la intervención militar en Haití. Tras el desembarco de las tropas kenianas Barbecue, solicitó un diálogo con el Gobierno de Transición, nombrado el 1 de junio. Luego de que el nuevo Primer Ministro, Garry Conille, respondiera a la solicitud llamándolo a deponer las armas, el líder pandillero convocó a sus hombres a ponerse de pie y luchar contra las tropas kenianas hasta las últimas consecuencias.

La tendencia hacia la consolidación de un estado policíaco se evidencia en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, donde los presupuestos destinados a seguridad superan notablemente a los asignados a defensa. Esta priorización refleja un enfoque intensificado en la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado, indicando una fuerte dependencia y alineación con la doctrina estadounidense de Nuevas Amenazas, que impulsa la securitización social bajo un modelo de capitalismo de hiper vigilancia para el control social.



LAS NUEVAS TENDENCIAS CONVIVEN TAMBIÉN CON VIEJAS FORMAS

En países como Venezuela y Cuba la injerencia norteamericana implica la imposición de un modelo restrictivo que impacta significativamente en los ámbitos políticos, sociales y económicos de estos países.

Desde 2014, las medidas coercitivas unilaterales económicas ilegales dirigidas a funcionarios y entidades venezolanas buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro para implementar "reformas democráticas" y económicas. En el marco de las elecciones presidenciales de este año y aludiendo al incumplimiento parcial de Venezuela con el acuerdo de Barbados, firmado en octubre del 2023, el gobierno de Estados Unidos restableció medidas coercitivas unilaterales, sobre el comercio de Petróleo de la República Bolivariana. El gobierno norteamericano ha aplicado cerca de 930 medidas coercitivas unilaterales ilegales hacia el territorio de Venezuela.

Cuba, por su parte, lleva más de 60 años sufriendo el bloqueo político, comercial y económico de los diferentes gobiernos de Estados Unidos (EEUU). Desde el año 1962 regulaciones como la Ley Torrendell, la Ley Helms-Burton y la incorporación de Cuba (hasta mayo de este año) a la lista de países denominados "terroristas" trae consecuencias no sólo para la política nacional e internacional sino para el desarrollo de una vida digna para cada ciudadano en el país.



La justicia y el control de ciertos poderes públicos también se transforma en herramienta para la injerencia local, mediante la cancelación política y el enjuiciamiento de líderes populares, con la lucha anticorrupción como pretexto. Tal como lo hizo la Escuela de las Américas con los cuerpos militares en su momento, actualmente lo hace la Escuela Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), con los cuerpos judiciales y fiscales a los que forma para que actúen. Así hemos observado este año las obstrucciones para impedir que el Movimiento Semilla Ocupe el sillón presidencial en Guatemala.

Luego de varias impugnaciones y obstrucciones sobraban dudas respecto de la posibilidad de que Bernardo Arévalo, electo presidente a fin de 2023, pudiera asumir el poder, en enero de 2024. Finalmente el Movimiento Semilla llegó al sillón presidencial, en una tensa jornada que no estuvo exenta de vericuetos judiciales que demoraron más de 8 horas el ingreso del presidente al Congreso, para concretar el acto de asunción.

Finalmente lo logró, no sin amenazas de impugnaciones, con el amplio apoyo de la comunidad internacional y de Estados Unidos, presagio de una estrecha relación con el país norteamericano.



Los primeros movimientos de gobierno implicaron la destitución de la Fiscalía que obstruyó judicialmente el proceso electoral, el impulso a reformas judiciales y reuniones con la vicepresidencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la subsecretaría del Departamento de Estado y el Comando Sur, para abordar temas de seguridad, migración, lucha anticorrupción, narcotráfico, cooperación económica y crisis climática. También llevó adelante medidas para otorgar subsidio a los sectores más pobres. Se reunió con las organizaciones indígenas y estrechó lazos particularmente con Honduras, acordando con su presidenta fortalecer el Sistema de Integración Centroamericano.

El mensaje parece claro: No habrá nuevos gobiernos progresistas en la región, que no dependan de una buena relación con Estados Unidos para mantenerse en el gobierno.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien intenta avanzar con profundas reformas de impacto social, también ha enfrentado este año fuertes ataques mediático judiciales para erosionar su imagen pública.

EL COMANDO SUR INTENSIFICA SU ACTIVIDAD EN LA REGIÓN

Desde el año 2023, el Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado sus actividades en América Latina bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el marco de la Doctrina de las nuevas amenazas, que constituye la versión de la "Doctrina de Seguridad Nacional 2.0", encabezada por Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales en toda la región latinoamericana.



Ejemplo de ello son: el anuncio de operaciones de vuelo en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Guyana; la aprobación de un acuerdo logístico con la comisión de relaciones exteriores de Uruguay y la ratificación en 2024 de la firma de un memorando de entendimiento militar con Ecuador. En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, la jefa del Comando Sur Laura Richardson profundizó las relaciones con el país. En abril, tras la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas en Argentina ambos anunciaron la construcción de una base naval integrada para conectar con la Antártida, y en el mes de julio se firmó un "Acta de Inicio del Memorándum de Entendimiento" con el objetivo de "intercambiar información y capacitaciones sobre hidrovías y ríos".

El Plan Cóndor fue la acción represiva y conspirativa coordinada entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) estadounidense en los años 70. Cuarenta años más tarde, el guión se repite, con diferentes métodos.

En este embate, EEUU avanza sobre el control de la región actualizando la Doctrina Monroe mediante estrategias multidimensionales como cooperación militar para el combate del narcotráfico, bloqueos comerciales, control de puertos y aguas territoriales, injerencia en golpes de estado tradicionales y sus tan conocidos golpes de desgaste institucional.



La lucha contra el narcotráfico se vislumbra como el nuevo flagelo que sirve de plataforma para el control de los territorios de Latinoamérica por parte de Estados Unidos a través de la “ayuda” económica, el desembarco de tropas y misiones extranjeras y las distintas formas que ha tomado la política del Estado de Excepción. Estas prácticas del país norteamericano no son nuevas sino que se han ensayado fuertemente a través de la instalación de bases militares estadounidenses en zonas estratégicas de países como Colombia, Bolivia, Paraguay, Honduras y Argentina, entre otros. Todas estas intervenciones en nombre del combate del narcotráfico y el crimen organizado, no consideran ni atienden a la soberanía nacional y a los derechos humanos de las necesidades de los pueblos de Nuestra América.



**AMÉRICA LATINA
EN EL CENTRO DE
LA DISPUTA POR
LOS RECURSOS
NATURALES
ESTRATÉGICOS**

AMÉRICA LATINA EN EL CENTRO DE LA DISPUTA POR LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS

La crisis energética mundial, exacerbada por la digitalización, está acelerando la transición hacia las llamadas energías limpias, dándole al litio una importancia central como mineral estratégico en la nueva matriz productiva en la que la electroportabilidad es un rasgo relevante. Esta transición energética y productiva incrementa la demanda de minerales, impulsando el desarrollo de la minería y el procesamiento de recursos como cobre, aluminio, litio, níquel, cobalto, grafito, cromo, sílice, magnesio y tierras raras. La disputa por el control de tales recursos, explica muchos fenómenos políticos de nuestra región.

El rol del territorio latinoamericano y caribeño es esencial en la provisión de estos recursos y particularmente de litio por su papel en la transición de una matriz energética basada en combustibles fósiles hacia una sustentada en energías “limpias” y renovables, impulsada por la adopción intensiva de nuevas tecnologías. En el llamado triángulo del litio, entre Argentina, Bolivia y Chile, albergan más del cincuenta por ciento del recurso mundial. Estos yacimientos, caracterizados por estar ubicados en salares facilitan la extracción, en comparación con fuentes como la pegmatita en Australia. La tendencia en el aumento de la demanda, está poniendo en tensión toda la estructura de abastecimiento del mineral.

El reciente intento de Golpe de Estado en Bolivia sumado al Golpe en 2019, los procesos de desregulación en Argentina, con la reciente Ley Bases bajo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), y las experiencias nacionalizadoras (parciales) en Chile y México dan cuenta de la disputa por el control de recursos estratégicos entre proyectos del capital, en medio del pasaje hacia una nueva fase productiva: la era digital.



En Bolivia, que según un informe estatal alberga la mayor reserva mundial con aproximadamente 23 millones de toneladas (tn) de litio -aunque produce 600 tn anuales (2023)-, se encuentra abierta la segunda fase de una convocatoria estatal para invertir en la industria del litio y recursos evaporíticos en siete de los salares del país. Unas 20 empresas extranjeras participan de la compulsa, luego de la convocatoria que se abrió en febrero y cerró en marzo de este año.

El año pasado, se habían firmado acuerdos con las empresas chinas Catl Brunp & Moc(CBC) y Citic Guoan para implementar la tecnología de extracción directa de litio. También se asociaron con Uranium One Group, de proveniencia rusa, para la construcción de plantas de carbonato de litio y con la empresa india Altimin para desarrollar tecnología en la fabricación de baterías de ion litio. Esto se suma a que a finales de 2023, Bolivia inauguró un complejo industrial en Uyuni con el objetivo de producir 15.000 toneladas anuales de litio mediante un sistema de piscinas de evaporación.

El mercado del litio está altamente concentrado. China es el principal consumidor del mineral a nivel mundial. Además, la demanda de este recurso es impulsada por empresas como Tesla, Albemarle, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), EnerSys y Livent. A esto se agrega un proceso de concentración: la fusión de dos empresas líderes en el mercado, Allkem (Australia) y Livent (Estados Unidos), a partir de la que se formó, en mayo de 2023, Arcadium Lithium, una de las cinco mayores productoras mundiales.



En junio, el presidente Luis Arce, se reunió con su par Ruso, Vladimir Putin, al visitar oficialmente el país para participar del Foro Económico de San Petersburgo. Allí se mostró interesado en ampliar la cooperación entre ambos países y planteó la posibilidad de encarar la explotación de baterías de litio en conjunto. Estas acciones entran en rivalidad con las pretensiones de la actual oposición al gobierno en Bolivia, coincidentes con las del multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla. Es oportuno recordar las declaraciones del Musk un año después del golpe de estado en Bolivia en 2020, en su cuenta X (también de su propiedad) en la que sugería su participación en el evento golpista: “Daremos un golpe a quien creamos necesario. Lidien con eso”, expresó abiertamente.

En julio de 2024, luego de la crisis política que generó la aventura golpista liderada por el Comandante del Ejército Juan José Zúñiga, Arce vinculó tales acontecimientos con los intereses por el control de este recurso y las tierras raras de Bolivia, en una entrevista con el diario El País.



Argentina por su parte, la segunda reserva en tamaño, alberga 20 millones de tn de litio, posee una producción anual de 33,000 tn Argentina (2023) y ocupa un lugar privilegiado junto a Chile, China y Austria, entre los pocos países del mundo que han desarrollado la capacidad de producirlo. Los costos de producción varían notablemente: 9,000 USD/ton en Australia y 3,500 USD/ton en salares de Chile y Argentina.

La postura del presidente argentino, Javier Milei, y sus declaraciones sobre el interés de Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos en el litio, subrayan la relación entre actores políticos, económicos y militares para apropiarse de estos recursos esenciales para la transición energética global. Argentina se encuentra en la vanguardia de un nuevo proceso neoliberal en la región, marcado por una lógica extractivista, sin agregado de valor en origen.

La normativa argentina sobre litio se basa en tres ejes: el Artículo 124 de la constitución nacional, que delega la administración de recursos mineros a las provincias; el Código de Minería que establece que el Estado es propietario de las minas y concede su explotación a descubridores y la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196, que ofrece incentivos y estabilidad fiscal por 30 años. A esto se suma la reciente aprobación de la Ley Bases que incluye el RIGI habilitando el ingreso de grandes inversiones con importantes estímulos impositivos y reducidos condicionamientos en cuanto a regulación ambiental, reinversión de ganancias y controles sobre producción, extracción y exportación.

En Argentina, hay dos proyectos operativos de litio: uno en Jujuy (Sales de Jujuy) y otro en Catamarca (Livent). Próximos proyectos incluyen Cauchari-Olaroz en Jujuy (Exar), Centenario-Ratones en Salta (Eramine) y Tres Quebradas en Catamarca (Liex). Estos proyectos son principalmente de propiedad privada y extranjera.

A finales de junio, el presidente argentino se reunió con un grupo de gobernadores de las provincias norteañas, territorio del triangulo del litio, y recordó una vez más, las intenciones de Musk de “quedarse con el oro blanco”. Su política avanza en la modificación de los actuales marcos jurídicos regulatorios, para que empresas y empresarios extranjeros, garanticen sus negocios particulares.



Por otra parte, la minería en Chile aporta cerca del 15% de su PIB, y más del 50% de las exportaciones. La principal actividad minera es el cobre, casi el 90% de las exportaciones son productos en cobre, pero el epicentro del conflicto está puesto sobre el litio. Chile es el mayor productor de litio con 140,000 tn anuales (un aproximado de 70% de la producción latinoamericana), aunque sus reservas de 10 millones de tn son las de menor relevancia en el triángulo regional. Este año el gobierno de Gabriel Boric habilitó la explotación privada de litio en 26 salares ubicados en el norte del país, con el objetivo de aumentar hasta 70% en una década la actual producción de este metal. El Estado se reservó el control mayoritario de Atacama y Maricunga.

Vale la pena destacar, además, que recientemente México se ha sumado a la agenda regional del litio a partir de la estatización de un yacimiento de litio en el norte del país, con asesoramiento del gobierno boliviano. Esto abre la posibilidad de mayor nivel de integración en caso de que una economía del tamaño de la mexicana se incorpore al desarrollo de este recurso, tejiendo planes con la región.

Históricamente, las transiciones energéticas han implicado cambios significativos en tecnologías y fuentes de energía, como el paso del carbón al petróleo y gas natural. En la actual transición el litio es fundamental para la vida moderna, con usos en baterías recargables (teléfonos móviles, autos, notebooks); medicina (tratamiento de trastorno bipolar y depresiones); aleaciones metálicas (aplicaciones nucleares y aeroespaciales); energía nuclear (fisión nuclear); grasas y lubricantes. En síntesis, el litio es clave para la industrialización e integración continental. Quien lo explote, controlará un eslabón estratégico en la actual fase digital del capitalismo



Estados Unidos tiene muy claro esto. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ha señalado la necesidad de "cuidar" los recursos estratégicos de la región, en referencia a las amenazas a sus intereses por parte de China y Rusia. América Latina es vista como un tesoro por los "piratas del Siglo XXI", quienes ahora buscan recursos naturales como petróleo, litio, agua, cobre, tierras raras, vientos y sol para producir hidrógeno verde. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo convencional y las octavas de gas del mundo. Argentina posee la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional. Chile y Perú lideran en reservas de cobre, y Brasil ocupa el tercer lugar en reservas de tierras raras.

Que los países de Latinoamérica se limiten a ser proveedores de materias primas no asegura una transición energética en un marco de igualdad. Más bien, fomenta la explotación de recursos con control territorial que maximiza las ganancias de ciertos grupos empresariales transnacionales. Esta debilidad se profundiza con la falta de políticas conjuntas entre los países miembros del triángulo del litio, ya que cada uno se encaminó a desarrollos para explotación de sus recursos de manera individual en vez de apostar a integración tecnológica y de inversión, que los posicionara como una entidad análoga a una "OPEP del litio".

La manera desarticulada en que se negocia el proceso de extracción y la producción del mineral en la región refleja en muchos casos los procesos de concentración económica y control territorial, la extranjerización de la economía y el regreso del FMI, que debilitan a los Estados frente a las grandes empresas y organismos de gobernanza global.



La discusión se vuelve estratégica, principalmente en aquellos países en los que el proyecto del pueblo se encuentra en posición de gobierno, lo que no necesariamente significa en posición de poder. El grado de soberanía con el que se resuelva este asunto depende en primer lugar, de las decisiones políticas y se ve condicionado luego por la capacidad tecnológica para garantizar cadenas locales de agregado de valor, además de la capacidad de maniobrar sobre marcos legales que en muchos casos se presentan laxos o tienden a flexibilizarse en cuanto a regalías, cuidado del medio ambiente o generación de empleo. Factores que aportan a las condiciones de negociación con el sector privado, local o extranjero y con otros países.

Sin embargo, la transición energética se presenta aún no solo como una oportunidad de motorizar procesos de desarrollo social, productivo y ambiental sostenible, sino también como la posibilidad de desarrollar agendas de integración para la acumulación de capacidades tecnológicas bajo un plan energético soberano, que permita a los pueblos latinoamericanos apropiarse de la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales estratégicos que son de propiedad común.



The background features a stylized illustration in a reddish-brown hue against a dark blue background. On the left, a woman's face is shown in profile, blindfolded with a thick band. On the right, a hand holds a scale of justice, with a chain of links draped over it. The overall theme suggests a critique of the legal system.

**LAWFARE EN
AMÉRICA LATINA:
EL ARMA POLÍTICA
DEL SIGLO XXI**

LAWFARE EN AMÉRICA LATINA: EL ARMA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

En los últimos años, América Latina ha sido testigo de una creciente utilización del lawfare como herramienta política para desacreditar y perseguir a figuras claves como así también para frenar y desestabilizar procesos progresistas y de izquierda en la región. Este fenómeno, que combina el uso estratégico del sistema judicial con campañas mediáticas intensivas, ha tenido repercusiones significativas afectando de manera destacada a varios líderes de nuestro continente.

En Brasil, Lula da Silva fue víctima de lawfare debido a acusaciones de corrupción vinculadas al escándalo de Petrobras, lo cual resultó en su condena y encarcelamiento. Este proceso judicial estuvo marcado por acusaciones cuestionables, filtraciones mediáticas selectivas y una intensa cobertura que debilitó su imagen pública y poder político.

En Bolivia, Evo Morales enfrentó acusaciones similares durante su presidencia, diseñadas para limitar su participación política y socavar su liderazgo mediante el sistema judicial, visto por muchos como politizado y manipulado.

En Ecuador, Rafael Correa, conocido por su postura anti-establishment, ha sido objeto de múltiples procesos judiciales que críticos consideran políticamente motivados. Estas acciones legales han buscado restringir su participación política y disminuir su influencia en la política nacional.

También sufrieron ataques de este tipo Fernando Lugo en Paraguay y más recientemente en Perú, Pedro Castillo, o en Guatemala, donde la Justicia y la Fiscalía, posicionadas como poderes supremos trabajaron en tandem para intentar inhabilitar la participación del movimiento semilla en las elecciones y luego, la asunción de Bernardo Arévalo.



Por su parte Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y vicepresidenta de Argentina, ha sido protagonista de numerosos procesos judiciales que destacan dentro del contexto del lawfare en América Latina. Desde su presidencia hasta la actualidad, ha enfrentado una serie de acusaciones ampliamente difundidas por medios de comunicación y sectores políticos adversos, las cuales han buscado no solo cuestionar su gestión y liderazgo político, sino también desacreditar su figura pública.

Varias son las causas que durante este año se esperaba que tuvieran resolución, considerando además que Cristina ya no tiene fueros. En la causa del Memorandum con Irán, desde noviembre del año pasado la Corte tiene para resolver si modifica la revocatoria de los sobreseimientos de CFK, Carlos Zannini, Juan Martín Mena y Angelina Abbona. Por otro lado, en las causas de LOS SAUCES- HOTESUR la Cámara Federal de Casación Penal reabrió esta causa luego de que el tribunal de juicio resolviera que no había delito y los acusados debían ser sobreseídos. Y por último, en la causa denominada de "Vialidad". La Corte nunca resolvió los planteos de CFK donde recusaba a los jueces que intervenían, entre ellos Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que se reunían en Olivos con Macri mientras se armaba esta causa.

En el mes de marzo del 2024 la defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Cámara de Casación Penal Federal que anule su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Durante su intervención, el abogado Carlos Beraldi afirmó que se violaron garantías constitucionales y calificó la sentencia de arbitraria.

El abogado destacó la ausencia de pruebas directas para sustentar la condena, criticando el uso de pruebas indirectas y mencionó varias irregularidades en el juicio, como la negativa a ampliar la investigación a toda la obra pública y el rechazo del 80% de las pruebas presentadas por la defensa. También introdujo un dictamen del procurador Rodolfo Barra que exculpa a Cristina de responsabilidad en el direccionamiento de obras viales.



Cristina Kirchner ✓
@CFKArgentina



He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos.

5:15 p. m. · 4 mar. 2020

Estos casos judiciales, algunos de los cuales se han extendido por años, pueden entenderse como instrumentos para limitar su participación política y socavar su influencia en el ámbito nacional e internacional.



Lula 
@LulaOficial



Minha solidariedade à vice-presidente da Argentina, [@CFKArgentina](#). Vi sua manifestação de que é vítima de lawfare e sabemos bem aqui no Brasil o quanto essa prática pode causar danos à democracia. Torço por uma justiça imparcial e independente para todos e pelo povo da Argentina.

[Traducir post](#)

1:06 p. m. · 7 dic. 2022

En junio de 2024 inició el juicio por el intento de magnificidio que ocurrió en 2022 contra la entonces vicepresidenta. Las primeras declaraciones del acusado, Fernando Sabag Montiel, explicitaron un móvil personal relacionado con el odio hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, desligando el hecho de motivos políticos o económicos. Aún apesar de que en la investigación aparecieron varias pistas que vinculan el hecho con Revolución Federal, organización de ultra derecha y con el Diputado del entonces opositor partido PRO, Gerardo Milman. También se encuentra en desarrollo un juicio por la eliminación de la información que se encontraba en el celular del implicado. La manera en que se desenvuelve la causa, que aborda nada más y nada menos que un intento de aniquilar a una de las principales figuras de la política argentina, pone de manifiesto a partir de este caso extremo, las operaciones en las que interviene el instrumento judicial como brazo de intervención directa sobre la política local.



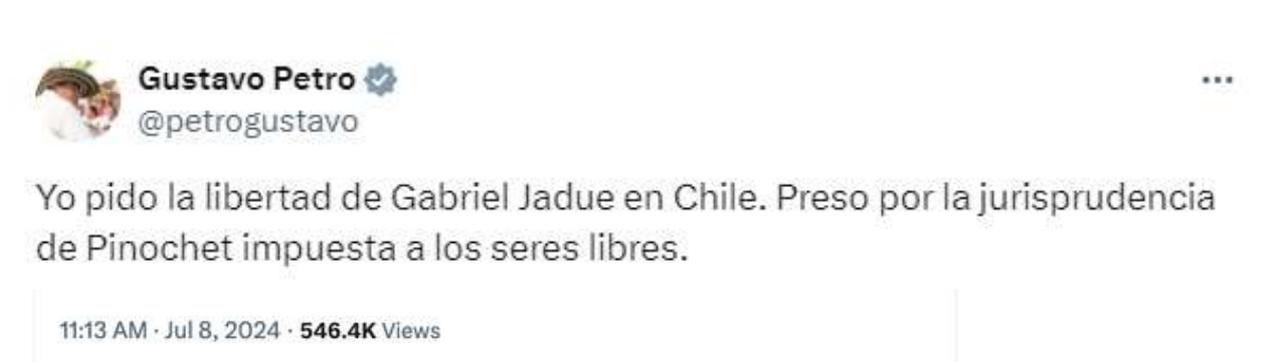
El caso más reciente de esta estrategia es el de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y figura prominente del Partido Comunista de Chile que ha enfrentado un escenario judicial y una campaña mediática-judicial que busca desacreditar su figura y las políticas progresistas que ha implementado, mostrando elementos característicos del lawfare en América Latina.

El 3 de junio, la justicia chilena ordenó la prisión preventiva del dirigente bajo la acusación de ser autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares"; que permitió a muchos chilenos acceder a medicamentos a precios reducidos, desafiando el monopolio del mercado farmacéutico.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!", declaró Jadue, en su cuenta de X.



El pasado 8 de julio Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó un mensaje en su cuenta de X: "Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres". Marcando claramente que se trata de un caso más de persecución política hacia un líder popular. Mientras que el día 9 de Julio, la defensa de Jadue pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar de forma urgente la prisión preventiva que la justicia chilena dictó contra él y se conformó un Comité internacional integrado por más de 100 figuras del ámbito político, académico y cultural que piden su liberación.



Desde que emergió como líder político, ha sido objeto de diversas acusaciones que, según sus partidarios, están diseñadas no solo para cuestionar su gestión como alcalde, sino también para desacreditar su candidatura presidencial. El caso judicial contra Jadue ha sido acompañado de una intensa cobertura mediática que pone en cuestión la imparcialidad del sistema judicial y los posibles intereses políticos detrás de las acusaciones.



Otro caso emblemático es el de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Recientemente en el mes de junio de 2024, la justicia británica consideró su liberación tras un acuerdo en el que Assange se declaró culpable de “obtención y divulgación de información sobre la defensa nacional,” lo que podría permitirle recuperar su libertad después de haber pasado 12 años recluido.

Assange se transformó en una figura central en la lucha por la transparencia y el acceso a la información, enfrentándose a una batalla legal que ejemplifica el uso del lawfare, o el empleo de la ley para perseguir a aquellos que desafían el poder establecido. Desde 2010, tras la filtración de documentos que revelaron actividades encubiertas y espionaje por parte del gobierno de Estados Unidos, Assange se convirtió en un objetivo de las autoridades estadounidenses.

Refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, fue entregado al Reino Unido en 2019 y ha permanecido en una cárcel de máxima seguridad mientras se decide su extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar hasta 175 años de prisión bajo la Ley de Espionaje.

El caso de Assange no solo representa una persecución individual, sino una manifestación del lawfare, utilizado para silenciar la verdad y prevenir futuras revelaciones. Este caso resuena en América Latina, una región con una historia de intervenciones extranjeras y manipulación legal para reprimir movimientos sociales y líderes disidentes. La extradición y procesamiento de Assange ejemplifican el disciplinamiento global impuesto por Estados Unidos, similar a tácticas históricas de represión en la región. La lucha de Assange es también la lucha de los pueblos latinoamericanos contra la opresión y la explotación, subrayando la importancia de defender la transparencia, la justicia y la libertad de expresión.



En febrero de este año el presidente Colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre la persecución judicial hacia él y miembros de su gobierno por parte de la Fiscalía, heredada del gobierno de Iván Duque. El mandatario se pronunció en su cuenta de la red social X de la siguiente manera: "(...)La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. (...) Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular".

Esta situación se sumó a los escándalos mediáticos que atravesó el presidente por acusaciones en contra de su hijo Nicolás Petro y el financiamiento de su campaña.

Con estos ejes y otros, la oposición colombiana, miembro de una poderosa elite ha convocado a las calles, en defensa de la democracia.

Detrás de la cortina de humo mediática, el mandatario intenta avanzar con reformas estratégicas (impositiva, previsional, de salud y laboral) para cambiar la realidad de las y los colombianos.

El lawfare se emplea en América Latina como una táctica política para perseguir a líderes sociales y políticos y herir de muerte proyectos populares. Esta estrategia utiliza el sistema judicial de manera selectiva para criminalizar y desacreditar a figuras que representan alternativas al status quo. Las acusaciones, frecuentemente motivadas por intereses políticos, no solo buscan castigar legalmente, sino también debilitar la legitimidad y capacidad de movilización de estos líderes, comprometiendo así la imparcialidad del sistema judicial y los principios democráticos.





**EL MOVIMIENTO DE
MUJERES Y
LGBTTIQANB+ OCUPA
LAS CALLES POR
MÁS DERECHOS
Y MENOS DERECHAS**

EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y LGBTTIQANB+ OCUPA LAS CALLES POR MÁS DERECHOS Y MENOS DERECHAS

Mientras a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe el movimiento de mujeres y LGBTTIQANB+ sostiene sus batallas, comienza a avanzar la ofensiva de los proyectos políticos de extrema derecha en el marco de una profunda crisis económica y social, cuyo resultado es el aumento exponencial de los índices de desempleo, pobreza e indigencia que sufren millones de personas.

El primer semestre de 2024 ha transcurrido en un contexto en el que la batalla contra la “ideología de género” es una consigna que resuena con fuerza entre los gobiernos neoliberales que se abren camino en la región. Las derechas conservadoras y reaccionarias articuladas con actores como las iglesias católicas y evangélicas, centran su contienda contra los feminismos y diversidades, presentados como parte de un movimiento de “neomarxismo cultural” que busca desestabilizar un presunto orden natural, ese “orden” que para las y los trabajadores sólo expresa precarización y miseria.

Hay que poder reflexionar por qué las fracciones más conservadoras del poder atacan directamente a este movimiento y sus consignas, preguntarnos dónde reside la supuesta peligrosidad que dichos sectores le atribuyen a su fuerza de cambio.

En un año en el que los Gobiernos como el argentino de Javier Milei, el peruano de Dina Boluarte y el salvadoreño de Nayib Bukele encabezan una ofensiva reaccionaria, los movimientos transfeministas de la región convocaron a protestas masivas para hacerles frente.



En Argentina Javier Milei que negaba la violencia por razones de género a pesar de los 120 feminicidios registrados en lo que va del año en curso y la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es del 26,4% según datos oficiales. Como presidente, pasó de la palabra a los hechos: eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y ordenó prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración pública.



El 8 de marzo, mientras se colmaban las calles con consignas contra las medidas económicas y represivas, el Gobierno informó que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada quedaba rebautizado como Salón de los Próceres.



El propio presidente y sus funcionarios repiten la intención de eliminar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la presentación de un proyecto de ley fallida, mientras prohíben el uso del lenguaje no binario en el Estado y las escuelas. El proyecto de Ley de Bases, que fue aprobada en junio, incluye modificar además la Ley de los “Mil Días”, que protegía a las personas gestantes y las primeras infancias, para incorporar un cambio de paradigma mediante el uso del concepto de “niño por nacer”, cambia la palabra “personas gestantes” por “madres embarazadas”, y modifica el concepto de violencia por motivos de género por “violencia intrafamiliar”.

En la misma línea el salvadoreño Nayib Bukele, recibido como una estrella de rock en la CPAC, decidió sacar de las escuelas públicas “la ideología de género”, tras promover un fuerte discurso en contra en su país.

A fines de febrero, el titular interino del Ministerio de Educación, José Mauricio Pineda, emitió un memorando en el que advirtió con y despidos si no se mantenía fuera de las escuelas materiales y contenidos relacionados con la “ideología de género”. Luego, a mediados de junio el Ministerio de Cultura canceló una obra de teatro de una compañía de artistas drag en el Teatro Nacional, tras recibir quejas en redes sociales de parte de grupos conservadores y religiosos del país, y dos semanas después despidió a 300 trabajadores del organismo por “promover agendas incompatibles con el gobierno”.



Nayib Bukele  
@nayibbukele



En estos momentos, el nuevo Ministro de Cultura [@raulncastillo](#) procederá a la destitución de más de 300 empleados del Ministerio, quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno.

Además, ahorraremos fondos públicos en el proceso.

La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar.

Medicina amarga 

5:07 p. m. · 27 jun. 2024 · 2,2 M Reproducciones

 3 mil

 8 mil

 35 mil

 649



La misma estrategia utilizó Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, quien según un recuento de la agencia Diadorimen, entre 2014 y 2022, se refirió a la ideología de género en sus redes sociales al menos 206 veces, demostrando así el potencial que este eje tiene para movilizar a su electorado y especialmente al poderoso sector evangélico. Amparados en aquél discurso, diputados ultraderechistas presentaron varios proyectos de ley para prohibir la perspectiva de género en las escuelas, pero ninguno lo logró.

En junio Diputados del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, presentaron un proyecto de ley que plantea a través de una modificación del Código Civil penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpen un embarazo después de las 22 semanas.

El proyecto generó una ola de protestas en todos los sectores del progresismo, pues de aprobarse las mujeres embarazadas víctimas de violación que aborten a partir de las 22 semanas tendrían penas mayores que sus agresores, logrando que la Cámara de Diputados de Brasil revirtiera su decisión de acelerar el tratamiento legislativo del proyecto en mención. En ese mismo mes, el Tribunal Supremo de Brasil imputó de forma unánime a los cinco acusados por el asesinato en 2018 de la concejala brasileña Marielle Franco, y de su conductor Anderson Gomes, meses después de que fueran detenidos y denunciados por la Fiscalía del país.



En cuanto a lo sucedido en Chile, José Antonio Kast, el católico de extrema derecha y líder del Partido Republicano a quien Boric se opuso en las última elecciones, fundó en 2019 una colectividad que se opone al matrimonio igualitario, a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, al aborto, a la educación sexual en las escuelas y a todo aquello que mencionan como “ideología de género”.

Mientras tanto el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género del país, presentó en el mes de mayo un informe donde se registra que en los primeros cuatro meses de 2024 Chile registró un aumento del 42% de femicidios en comparación con el mismo período en 2023. Un mes más tarde, la ministra de la Mujer y la equidad de género, Antonia Orellana, informó que se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que había sido ingresada hace 7 años durante el segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet.



Actualmente sólo hay tres mujeres jefas de Estado en América Latina. Xiomara Castro en Honduras es la primera mujer en asumir la presidencia del país centroamericano y la presidencia pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Castro además integró en su plan de gobierno la agenda feminista de ampliación de derechos, un importante desafío en uno de los países más conservadores de la región.

En Perú con la presidencia de Dina Boluarte ocurre todo lo contrario. Boluarte asume la presidencia el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Su gobierno es señalado por las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos y la represión a la protesta social. En dos meses de manifestaciones 70 personas perdieron la vida, 48 de ellas murieron producto de disparos de la policía y el ejército. Tras el fuerte repudio en las calles, a fines de junio el Ministerio de Salud tuvo que dar marcha atrás, mediante una nueva resolución ministerial, con catalogar a la transexualidad y el travestismo como enfermedades mentales.



El 2 de junio Claudia Sheinbaum resultó ser la primera presidenta mujer electa de México por el Partido Morena y la persona más votada en la historia del país, quién asumirá el cargo el primero de octubre y declaró “Respetaremos y haremos respetar la diversidad política, social, cultural, de género y sexual.

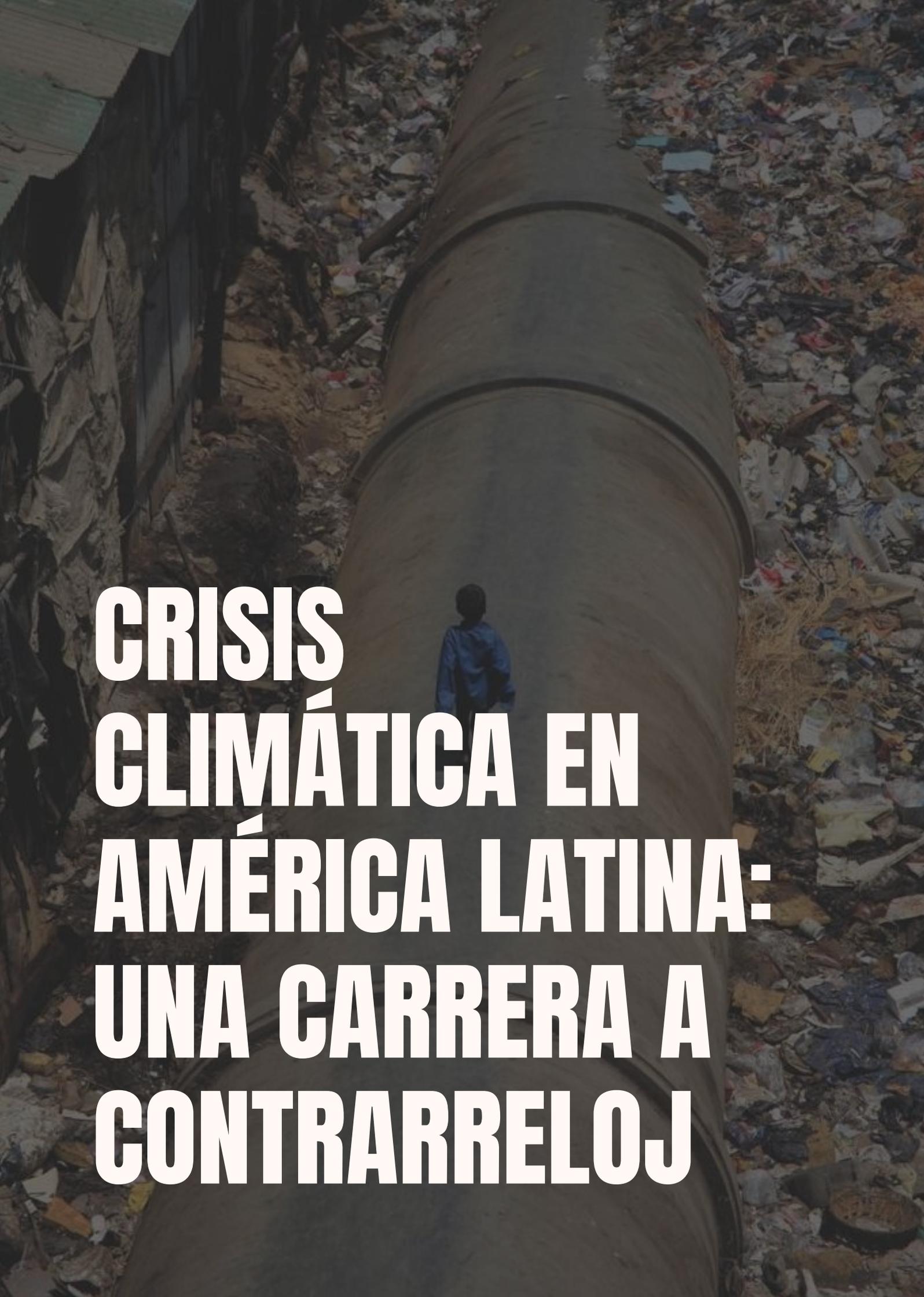
Seguiremos luchando contra cualquier forma de discriminación”. A lo largo del mes fue realizando declaraciones y acciones que adelantan los avances que se harán en su gobierno, como por ejemplo reunirse con diputados y senadores electos para poner en marcha la reforma judicial, además de anunciar reformas constitucionales como la no reelección de legisladores y el apoyo económico para las mujeres de 60 a 64 años y estudiantes de nivel básico.



Con estos indicadores queda claro que los derechos para mujeres y la comunidad LGBTTIQ+ son un punto de inflexión en las políticas de los Estados, y por ello un foco de tensión y movilización constante. La derecha avanza por Latinoamérica y el Caribe a pasos agigantados, difundiendo discursos de odio y buscando la enemistad de la comunidad.

Sin embargo, los hechos demuestran que a este amplio movimiento se le puede sacar la institucionalidad pero no van a lograr detener el avance de sus protestas y consignas de avanzada, cuya tarea es seguir construyendo un programa que permita trazar un horizonte, construir la mística y la épica que ha caracterizado cada proceso de lucha histórica, que permita salir de la inmovilidad, superar los discursos de moderación y consenso con los poderosos, escenario donde las grandes mayorías siempre pierden potencia y derechos. Un programa que permita radicalizar la fuerza hacia un transfeminismo popular latinoamericano.



A photograph of a child standing on a large, dark, cylindrical pipe in a landfill. The ground is covered in trash and debris. The image is dark and has a somber tone.

**CRISIS
CLIMÁTICA EN
AMÉRICA LATINA:
UNA CARRERA A
CONTRARRELOJ**

CRISIS CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA: UNA CARRERA A CONTRARRELOJ

Olas de calor, inundaciones, incendios forestales y pérdida de biodiversidad son cada vez más fuente de noticia en todas partes del mundo. América Latina y el Caribe (ALC) no está exenta de ello. Nuestra región es una de las más afectadas por el cambio climático y los fenómenos ambientales extremos, lo cual pone en peligro no sólo el bienestar y la supervivencia de nuestras sociedades sino también el cuidado y la protección de nuestros bienes comunes.

La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que Latinoamérica y el Caribe alcanzó en 2023 un número récord de desastres climáticos. Sin embargo pareciera que ya en los primeros seis meses del 2024 va camino a superar un nuevo límite.



INCENDIOS FORESTALES

Enero sorprendió a Colombia con numerosos focos de incendios lo que obligó al Gobierno de Gustavo Petro a emitir un decreto de desastre nacional con el fin de destinar recursos para atender y contener la emergencia. Además Petro junto a su par brasileño, Lula da Silva, mantuvieron comunicaciones telefónicas donde Lula propuso una nueva reunión para la creación de un Grupo de Trabajo, en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, lo cual permitirá avanzar en los esfuerzos conjuntos para combatir los focos de incendio en la Amazonía.



La situación se agravó en febrero, cuando Chile tuvo que enfrentar el incendio más mortífero de su historia, con 134 fallecidos y miles de viviendas destruidas. El foco de los incendios fue principalmente en la Región de Valparaíso, especialmente el incendio denominado Complejo Las Tablas - Reserva Nacional Lago Peñuelas. Las llamas rodearon las ciudades de Viña del Mar y Quilpué, donde se cortó la electricidad y se interrumpieron las comunicaciones. Sumado a eso, debido a la prolongada sequía que afecta a Chile desde hace ya muchos años, no llegó el agua suficiente para el llenado de camiones hidrantes para combatir el fuego.

El fuego presentó comportamientos extremos con características de incendio de sexta generación, dejando un saldo de 8.657 hectáreas afectadas en zonas de interfaz urbano forestal según el balance presentado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) chilena.

El Pantanal de Brasil, el humedal tropical más grande del mundo, alcanzó un nuevo récord histórico con más de 3000 focos de incendio en lo que va del año. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) el número de incendios en el gigante de sudamérica este año ya representa un aumento del 898% respecto al mismo periodo en 2023, siendo el año 2024, solo en estos meses, el peor jamás registrado para el Pantanal.

AMAZONAS EN EL "OJO DE LA TORMENTA"

Según un informe publicado por la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) el Amazonas está "cada vez más expuesta a un estrés sin precedentes" debido a la conjunción de factores críticos como el aumento de las temperaturas, las sequías extremas, la descontrolada deforestación y los incendios forestales. Estas "retroalimentaciones" pueden "desencadenar transiciones ecosistémicas inesperadas" como un "colapso forestal" mucho antes de lo esperado.

Es por eso que proteger el Amazonas y frenar un posible colapso ambiental resulta ser una necesidad imperante para este joven siglo XXI. Al comienzo de nuevo mandato Lula da Silva afirmó que frenaría completamente la deforestación en la selva amazónica brasileña para 2030. A pesar de estar aún lejos de cumplir con el objetivo de deforestación cero, en marzo el Instituto Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia, Imazon, informó que la selva tropical registró su menor tasa de deforestación para un bimestre desde hace 6 años.



Sin embargo, el mandatario brasileño aún tiene el gran desafío de frenar la deforestación y los incendios forestales intencionales que se dan en la selva amazónica del norte, particularmente en el estado brasileño de Roraima, ligados al desarrollo del agronegocio. Empresas como Amaggi, BBF y Oxe Energía financian proyectos en el estado de Roraima por más de 4,2 mil millones de reales, a fin de garantizar mejores condiciones productivas y logísticas para la exportación. Inversiones destinadas a la producción agrícola, la bioenergía y las infraestructuras de almacenamiento y flujo, así como los servicios de exportación.

Esta situación generó que se alcanzaran las mayores emisiones de carbono registradas en febrero desde, al menos, 2003 en todo Brasil según el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. Dicho estado fronterizo con Venezuela y Guyana, es hogar de más de 30 mil indígenas Yanomami y fuente de grandes riquezas minerales donde la lucha contra los mineros ilegales o “garimpeiros” resulta fundamental para preservar las miles de hectáreas de selva amazónica que son deforestadas año a año por esta actividad ilegal. Un tema por el ambos mandatarios progresistas, Da Silva y Petro, se han reunido para trazar soluciones.

OLAS DE CALOR E INUNDACIONES RÉCORD

Numerosas localidades de América Latina registraron olas de calor con temperaturas récord como fue el caso de la ciudad de Río de Janeiro donde se registraron en Marzo sensaciones térmicas que superaron los 60 °C.

A su vez, los problemas relacionados con el agua generan consecuencias devastadoras en numerosos países de ALC. Por ejemplo, en Bolivia más de dos millones de personas sufrieron los efectos de la falta de lluvia, mientras que las tormentas dejaron más de 50 muertes y 430 mil personas afectadas, una situación directamente relacionada con la deforestación de sus bosques y selvas. Según datos publicados por la fundación FAN, en los últimos cinco años, Bolivia perdió 40.399 hectáreas de la cuenca del Acre, un 26 por ciento de su superficie.

Brasil no corrió mejor suerte, ya que el estado sureño de Rio Grande Do Sul sufrió inundaciones históricas donde el 80% del territorio se encontró bajo el agua, cobrándose la vida de más de 154 personas y afectando a unos 2,2 millones de personas. Las fuertes lluvias también afectaron los países limítrofes de Argentina y Uruguay con miles de evacuados y numerosas localidades afectadas por el agua.



LA BATALLA CONTRA EL TIEMPO COMENZÓ HACE RATO

Hacia la mitad de este 2024 las consecuencias de la crisis climática y ecológica son cada vez más extremas. La incorporación de la temática ambiental en las agendas políticas requiere de acciones inmediatas y firmes para toda la región. Será la lucha y la presión social una pieza clave en ALC, lo que permitirá que la agenda ambiental esté presente en cada uno de los gobiernos de la región marcando el rumbo hacia un camino sustentable, de cuidado de nuestros bienes comunes y fundamentalmente de mejorar la calidad de vida de la población latinoamericana.



A photograph of a busy street market scene, likely in Latin America, showing people walking and browsing stalls. The image is overlaid with a dark semi-transparent layer and white text. The text reads:

**ESCLAVOS DEL
TRABAJO: EL CÍRCULO
VICIOSO DE LA BAJA
PRODUCTIVIDAD EN
LATINOAMÉRICA**

ESCLAVOS DEL TRABAJO: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA

La productividad laboral y la calidad del empleo en Latinoamérica se encuentra en niveles alarmantemente bajos, una problemática que impacta directamente en el desarrollo económico y social de la región. A pesar de contar con una fuerza laboral numerosa, diversos factores han contribuido a que la productividad se mantenga rezagada, afectando la calidad de vida de las y los trabajadores.

En su informe de Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2024, la OIT destaca que la pobreza extrema y pobreza moderada seguirán aumentando para este año. En la región, las tasas de empleo no han vuelto del todo a los niveles anteriores a la pandemia. El desempleo mundial aumentará en 2024, al igual que las desigualdades, además de que habrá un estancamiento de la productividad. La agencia laboral refiere que tanto las perspectivas del mercado laboral como el desempleo mundial empeorará debido a la fragilidad de la economía global.

Claro está que la desigualdad y el desempleo no se distribuyen de la misma forma en todas los países, la OIT explica que las diferencias entre los países de renta alta y baja se mantienen y cita que mientras que la tasa de brecha de empleo en 2023 era del 8,2% en los países de renta alta, se situaba en el 20,5% en el grupo de renta baja. Del mismo modo, la tasa de desempleo en 2023 fue del 4,5% en los países de renta alta, y del 5,7% en los de renta baja. Sin embargo, los ingresos disponibles han disminuido en la mayoría de los países del G20 y la erosión de los niveles de vida resultante de la inflación “no es probable que se compense rápidamente”, dice el informe.



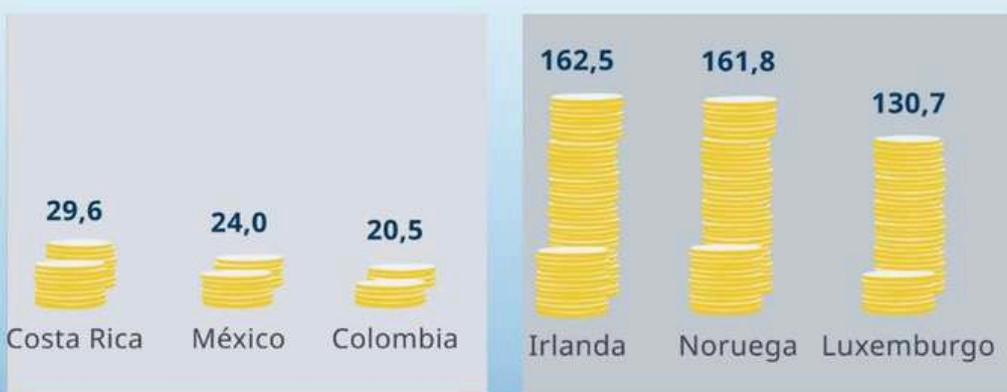
LA JORNADA LABORAL Y PRODUCTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA

La OIT promueve desde hace años una jornada laboral de 40 horas semanales, con un máximo de 48 horas. Sin embargo, en América Latina, muchos países exceden estas recomendaciones. En Argentina, Costa Rica, México y Perú, la jornada laboral alcanza las 48 horas semanales, mientras que en Colombia es de 47 horas, en transición a reducirse a 42 horas en 2028. Chile y Ecuador han adoptado jornadas de 40 horas, alineándose con las recomendaciones de la OIT.

Promedio de horas trabajadas al año por persona



Productividad por hora trabajada en dolares



Fuente: OCDE 2024

Pero trabajar más horas no necesariamente se traduce en mayor productividad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), países como Alemania y Dinamarca, donde se trabaja menos horas anualmente (1.346 y 1.394 horas respectivamente), tienen una productividad por hora trabajada significativamente mayor que en países latinoamericanos como México y Colombia (2.226 horas anuales). Por ejemplo, la productividad por hora trabajada en Irlanda es de 162,5 dólares, mientras que en México es apenas de 24 dólares y en Colombia de 20,5 dólares. Cabe señalar que el organismo internacional mide el porcentaje de productividad como PIB multiplicado por trabajo aportado.

El bajo nivel de productividad en América Latina no se debe a una falta de trabajadores, sino a una serie de factores estructurales y económicos propios de la histórica división internacional del trabajo que llevaron adelante las grandes potencias económicas del siglo XIX y XX.

Esto último se puede observar claramente en el libro de historia de Eric Hobsbawm cuando dice: «La economía de América Latina, desde mediados del siglo XX, estuvo marcada por su papel como proveedora de materias primas y productos agrícolas, con una clase trabajadora que enfrentaba condiciones laborales difíciles y salarios bajos, reflejo de su posición subordinada en la economía global».

El autor también hace referencia a la estructura laboral que se generó desde los países imperiales, cuando dice: «El papel de la clase trabajadora en América Latina, especialmente en el sector agrícola y minero, fue crucial para las exportaciones, pero conllevó condiciones laborales adversas y bajos salarios, reflejando la dependencia de la región en la economía global». (Hobsbawm, 1994, p. 120 y 203). La historia general de la región marca en lo concreto las condiciones materiales de trabajadores y empresarios en la actualidad.



ALGUNAS CAUSAS ESTRUCTURALES

Entre las principales causas se encuentran: falta de inversión en tecnología e innovación, sobre todo para el desarrollo de la actual fase digital del capitalismo que trae un nuevo locus standi virtual/digital. La baja inversión en desarrollo tecnológico limita la capacidad de las y los trabajadores para ser más productivos y de los Estados nacionales para generar más valor.

Además, el informe de la OIT destaca que la calidad de la educación en la región es baja. Según la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), América Latina se ubica en la mitad inferior del ranking global en Matemática, Lectura y Ciencia. Esto también se traduce en menores habilidades para producir valor.

Otro problema estructural es el aumento de la informalidad laboral, que según la OIT es del 58% de los trabajadores en el mundo. En países como Honduras y Bolivia, esta cifra supera el 80%. La alta tasa de informalidad limita el acceso a capacitación y beneficios laborales, perpetuando la baja productividad.

Sumado a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Índice de Mejores Trabajos 2024 destaca que la calidad del empleo en la región es preocupantemente baja, con un puntaje de 41,2 sobre 100.



Índice de mejores trabajos: calidad de empleo y cantidad de empleo



Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 2024

El índice revela que el 55% de los trabajadores en América Latina y el Caribe tiene un empleo informal sin contrato ni cobertura de seguridad social, y tres de cada diez no alcanzan los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza. Además, las mujeres y los jóvenes enfrentan mayores desventajas en términos de calidad del empleo, con brechas significativas en comparación con hombres y adultos.

LA DESIGUALDAD SOCIAL CRECE AL RITMO QUE AUMENTA LA POBREZA

La riqueza en América Latina y el Caribe está tan concentrada que menos de cien personas, conocidas como mil-millonarios, poseen una fortuna de 480.000 millones de dólares, lo que equivale al PIB combinado de Chile y Ecuador. Estos datos provienen del último informe de Oxfam. Para ponerlo en perspectiva, a un trabajador que gana el salario mínimo promedio en la región le tomaría 90 años ganar lo que un mil-millonario acumula en un solo día.

Desde el año 2000, las fortunas de los mil-millonarios han crecido un 368%, casi seis veces más rápido que el crecimiento económico de la región. Carlos Slim, el mexicano dueño de América Móvil (telecomunicaciones) y de Grupo Carso (finanzas y negocio inmobiliario) acapara el 20% de la fortuna de los mil millones seguido de Eduardo Saverin, el brasileño cofundador de Facebook. Son seguidos por empresarios del rubro minero en México y Chile.

La baja productividad y la mala calidad del empleo tienen diversas consecuencias para las y los trabajadores, entre ellas: los bajos salarios y la falta de seguridad social, lo que los deja vulnerables ante enfermedades, accidentes laborales y la vejez; y finalmente, trae aparejada escasas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, perpetuando el ciclo de baja productividad.

Algunos países de la región están tomando medidas para mejorar la situación. En Colombia, el plan de reducción de la jornada laboral no incluye al sector informal, lo que podría aumentar el costo de contratación y expandir el sector informal. En México, se está debatiendo una reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Costa Rica está considerando trabajar cuatro días a la semana, distribuyendo las 48 horas en estos días, aunque esta medida no reduciría la cantidad de horas trabajadas.

En contraste, países europeos como Alemania, Reino Unido y España están probando semanas laborales de cuatro días sin afectar la productividad. Por ejemplo, en la prueba más grande de este tipo llevada adelante por 61 empresas del Reino Unido, que involucró a alrededor de 2.900 trabajadores, se realizó reducción del 20% en las horas de trabajo de todo el personal durante seis meses, sin reducción de salarios, y en donde se obtuvieron resultados muy significativos relacionados a sostenimiento de productividad, mejora en la calidad del sueño, reducción del estrés, entre otros.

Mejorar la productividad y la calidad del empleo en América Latina requiere un enfoque integral que incluya la reducción de la jornada laboral, la inversión en tecnología y educación, y la formalización del empleo.

Esta nota se basa en datos de la OIT, OCDE y el informe «Índice de Mejores Trabajos 2024» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



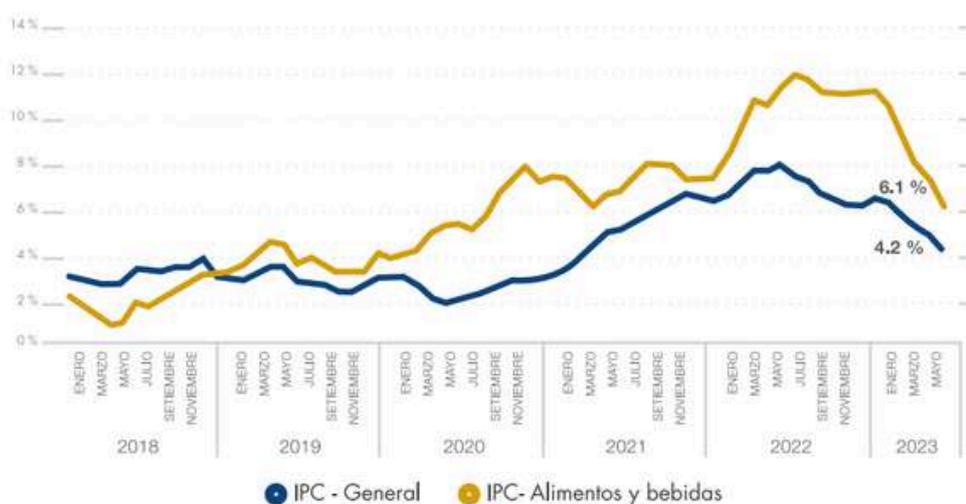


COLONIALISMO DE LA NUEVA FASE. DESAFÍOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA REGIÓN

En los últimos años la región latinoamericana y caribeña se ha visto afectada por diversas crisis de índole alimentaria, energética y financiera, interrelacionadas con los desafíos que presentan el cambio climático y las epidemias en materia de salud, una situación que impacta directamente en las condiciones de vida de la población. En medio de la crisis, sin embargo, el sector agroalimentario aumenta su productividad. ¿Qué modelo productivo necesita América Latina y el Caribe para que dicho crecimiento pueda derramar en sus poblaciones?

Según el informe “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe (ALC) 2023-2024”, elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 82 millones de personas se encuentran en situación de extrema pobreza y 43,2 millones de personas (16%) padecen hambre en la región. La inflación anualizada en alimentos alcanza 6,1% mientras que la inflación general llega a 4,2%. A esto se suma el aumento de los costos en la producción y la logística de los productos agroalimentarios.

ALC (18 países), Índice de Precios al Consumidor General y de Alimentos, enero de 2018 a junio de 2023



Fuente: Informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2023-2024. , CEPAL, FAO e IICA

Una gran problemática, asociada a las deficiencias en los sistemas de producción, es la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Los valores globales indican que la pérdida se sitúa entre el 27% y 32% de toda la producción de alimentos. El World Resources Institute reporta, por ejemplo, pérdidas entre el 15% y el 42% dependiendo de la región, con ALC en los valores inferiores del espectro.

En la región, la mayor parte de las pérdidas ocurren en la cosecha y el consumo final. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuantifica las pérdidas y desperdicios en ALC en 127 millones de toneladas por año, que podrían cubrir las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. Sin embargo el informe resalta que a pesar de estos indicadores y las crisis sufridas, el sector agroalimentario aumentó el PIB agropecuario y las exportaciones regionales por encima del promedio mundial.



En un informe del BID publicado en junio de 2024 se plantea que América Latina y el Caribe han superado el crecimiento global en las últimas cinco a seis décadas y aumentado su participación en la producción agropecuaria y alimentaria total mundial desde el 10% en los años sesenta, a cerca del 13% en la actualidad. Desde la década de 2000, se convirtió también en la principal región exportadora neta de alimentos del mundo.

Las exportaciones de bienes desde América Latina tuvieron un crecimiento interanual del 1,3% en el primer trimestre de 2024, frente al mismo período del año anterior. Esto nos lleva a preguntarnos por el modelo de desarrollo y de producción agroalimentaria que necesita la región para poder equilibrar estos indicadores que muestran por un lado cifras crecientes de pobreza, falta de acceso a los alimentos y efectos adversos en la biodiversidad, y por otro cifras, también crecientes, de alta productividad y exportaciones; con el constante desafío de sostener y cuidar la humanidad.

La pregunta tiene como telón de fondo el modelo extractivista, agroexportador y del monocultivo, el cual no es nuevo en nuestra región. Miles de hectáreas deforestadas y poblaciones desplazadas son consecuencia de modelos de desarrollo que tienen como base la extracción de materias primas a costa de la sustentabilidad de nuestra biosfera y biodiversidad. Un modelo que atenta contra la “sustentabilidad social y económica” de millones de latinoamericanos y latinoamericanas, aumentando además la frecuencia en la ocurrencia de contingencias climáticas, tales como sequías, inundaciones, incendios, etc.

Desde la mirada del agronegocio el planteo consiste en poner a la agricultura del lado “bueno”, como un modelo que atiende a la cuestión ambiental y el uso de avances tecnológicos de punta. Solo por citar un ejemplo, en el pasado mes de Abril, Costa Rica realizó la primera exportación de café libre de deforestación, en el marco del “Pacto Verde”, un plan de la UE que promueve medidas contra el cambio climático.

Mientras el modelo de agronegocios ve en primer lugar eficiencia, productividad y ensaya la economía circular para proteger el ambiente, se desentiende de los índices de desigualdad, la pobreza y el hambre que en términos objetivos afectan a millones de personas en ALC.

EL MODELO EXTRACTIVISTA ATRAVESADO POR LA CRISIS CLIMÁTICA. EL EFECTO SOJA

La demanda mundial de soja se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas y China encabeza la lista de los principales consumidores y aunque también la produce, las cantidades de consumo han superado las de producción. En Latinoamérica, Brasil, Argentina y Paraguay figuran como los principales productores, en ese orden.

En Argentina, según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de soja 2023/24 alcanzaría 50 Mt, dos veces y media la producción de la campaña precedente. Este incremento en la producción proviene tanto del aumento de la superficie cosechada (+35,3%) como del incremento en los rindes (+84,8%), respecto de la anterior campaña.

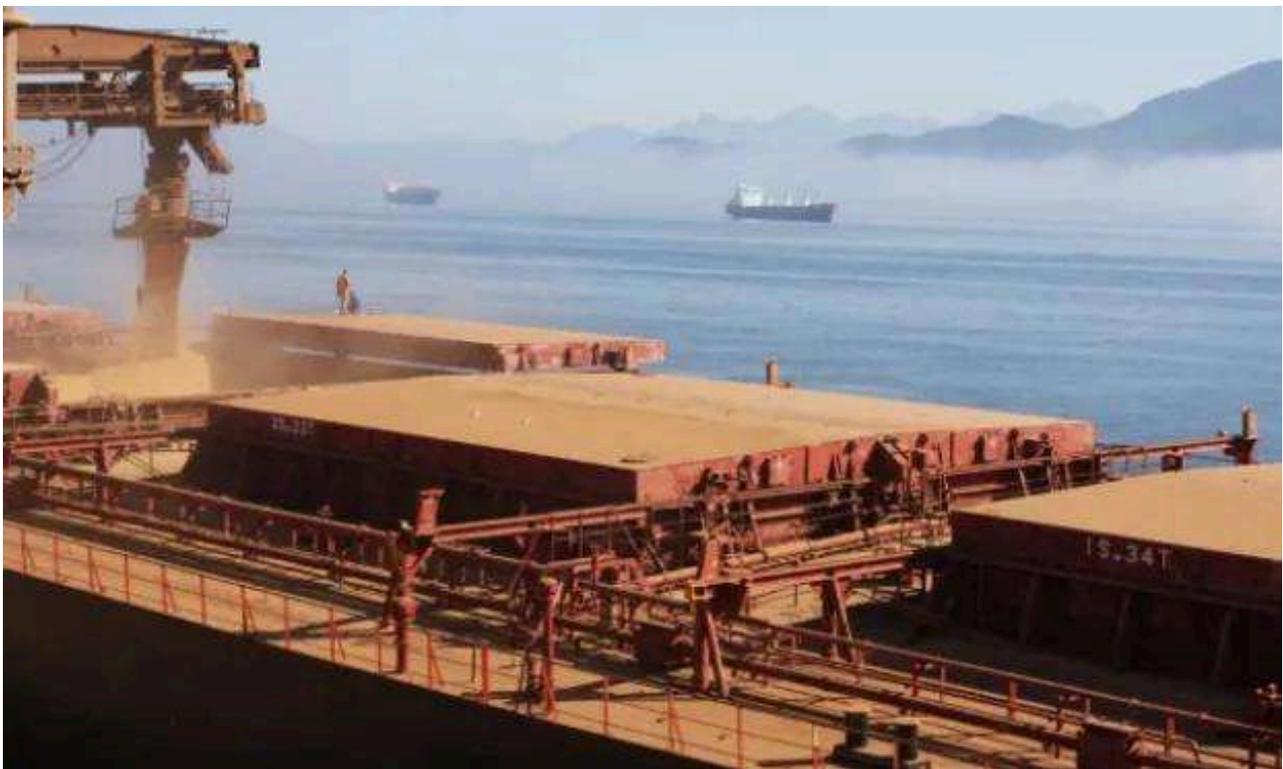
Por su parte, Paraguay espera una producción de soja para la campaña 2023/2024 de entre 8,9 y 9 millones de toneladas, de acuerdo con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).



Brasil no es la excepción, y el avance de la frontera agrícola y sus consecuencias trajeron en esta primera mitad del año enormes pérdidas ambientales que ponen en jaque los proyectos de seguridad y soberanía alimentaria para todo el sur global.

En enero de 2024, la agencia de noticias Bloomberg señalaba que Brasil había superado a Estados Unidos (EE.UU), como el principal proveedor de maíz y soja a China. Los embarques del país sudamericano alcanzaron a 8.79 millones de toneladas en los primeros 9 meses de 2023, lo que implica más de 40% de las importaciones de la República Popular, en tanto que las cargas de EE.UU fueron de 6.5 millones de toneladas (30% del total), representando una caída de más de 50% respecto a 2022.

Algo semejante había ocurrido con las importaciones de soja, que totalizaron 89.63 millones de toneladas en los primeros 11 meses de 2023, lo que equivale a un auge de 13,3% comparado con igual periodo del año anterior.



En febrero, el gobierno de Brasil estimaba que la cosecha de granos sería de 299,8 millones de toneladas en 2024, un 6,3 % inferior a la del año anterior, y afirmaba que se vería impactada por los "problemas climáticos".

En mayo de 2024, Brasil se llevó la atención de la región debido a las grandes cantidades de precipitaciones recibidas que llevaron a una de las inundaciones de mayor dimensión de los últimos tiempos. Desde el 28 de abril, lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones generalizadas azotaron fuertemente el estado brasileño de Rio Grande do Sul, el cual se destaca en la producción de cereales como soja, maíz y trigo.

Estimaciones del gobierno afirmaban que las inundaciones afectaron un total de 4.521 kilómetros de calles, avenidas, carreteras y autopistas en los 78 municipios que declararon estado de calamidad pública. Esto es 124 km más que la distancia para atravesar Brasil de norte a sur.

Debido a las inundaciones, la Empresa Brasileña de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater) estimó que 2,7 millones de hectáreas de suelo, casi la superficie de Bélgica, perdieron fertilidad y el gobierno estatal informó que su recuperación costaría alrededor de R\$16 mil millones (US\$3 mil millones de dólares).



Rio Grande do Sul cosechó alrededor del 75% de la soja sembrada antes de las inundaciones y alcanzó un rendimiento récord de alrededor de 22 millones de toneladas, un 68% más que la temporada pasada, cuando la sequía destruyó algunos campos. Sin embargo y a pesar de las inundaciones, los organismos anunciaron que la cosecha de granos en Brasil sería de 299,6 millones de toneladas en 2024, es decir un mayor nivel que los cálculos de principios de año.

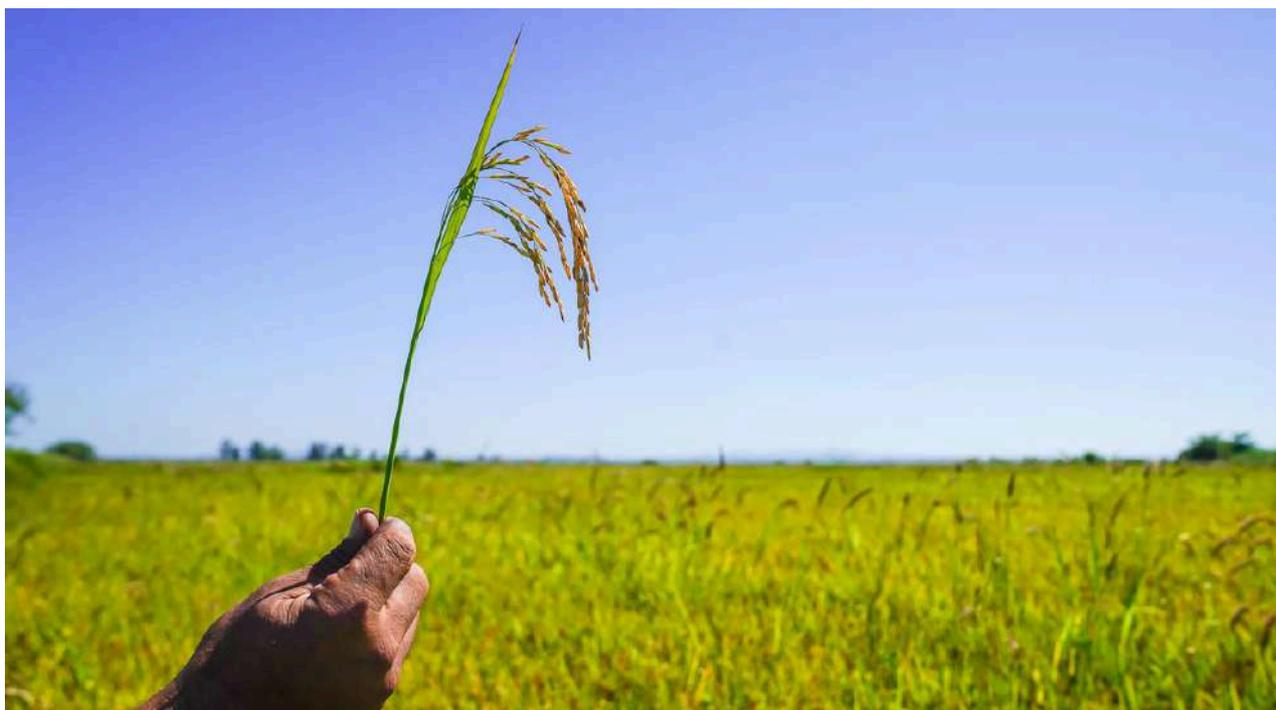
Las consecuencias de este evento climático traspasan lo netamente productivo. Rio Grande do Sul ha entrado en el mapa de refugiados climáticos, un término que hace referencia a aquellas personas que obligadamente deben abandonar su territorio de forma temporal o permanente debido a una gran tragedia climática que compromete seriamente o hace imposible la vida en su lugar.

LA MIRADA PUESTA EN EL HUMANO

Desde la mirada del ser humano organizado en comunidad, se ve al alimento como un bien social y el cuidado de nuestra casa común, es decir de la biosfera y su biodiversidad.

Claro que también se tiene en cuenta la eficiencia, la productividad, la economía circular, el acceso generalizado de la tecnología, la competitividad global, la generación de divisas y la generación de puestos de trabajo. Se trata de plantear un programa productivo, sustentable, e inclusivo, para aumentar la producción agroalimentaria, generar más puestos de trabajo y más exportaciones del sector agropecuario.

Este programa se basa en la aplicación de las nuevas tecnologías y conectividad rural de todo el territorio. En la unión de lo real, lo virtual y lo biológico se materializan las acciones con estas nuevas herramientas que potencian y eficientizan las tareas realizadas por hombres y mujeres, haciéndolas más productivas, más competitivas, evitando el impacto ambiental, pero además de eficientar los procesos productivos, mejoran las condiciones de las labores y de vida de quienes trabajan y producen en la tierra.



En los últimos 25 años, junto con la expansión del uso de la tierra, el factor determinante del incremento de la productividad ha sido el proceso de adopción de tecnología y transformaciones organizativas. Según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), para el 2050, la Agricultura de Precisión podría incrementar en promedio un 12,1% los rendimientos del maíz, un 13,2% los del arroz y un 28,3% los del trigo en ALC.

Otra señal clara de que las tecnologías aplicadas a los sistemas agropecuarios (AgTech) crecen en su desarrollo y aplicación es que, de mantenerse la tendencia, el tamaño de este mercado pasaría de los USD 9 mil MM del 2020 a USD 22,5 mil MM en el 2025. Sin embargo, estas tecnologías y las prácticas recomendadas por los entes de investigación e innovación están aún lejos de los pequeños productores, que generan el 70% de los alimentos globales, por lo tanto, es necesario intensificar las capacidades y cobertura de la extensión agropecuaria hacia ese segmento, así como el financiamiento de las innovaciones y su implementación.

Este modelo donde el humano está en el centro es con conocimiento, ciencia, con innovación, con tecnología y bioeconomía. Se necesita estar preparado para el agro de este momento de informatización-digitalización-virtualización del sistema capitalista global, lo cual requiere capacitar a los productores de manera intensiva en las nuevas tecnologías: robótica, Startups, Blockchain, Big Data, IoT y genómica.

La pelea no es contra la tecnología, sino contra la concentración de la propiedad y la apropiación de los beneficios de las mismas en pocas manos, al servicio de la renta del capital.



Ante el agotamiento de los recursos y las inclemencias climáticas, cada vez se hace más urgente la eficientización de la productividad. Es necesario aprovechar las ventajas competitivas que aporta cada territorio, maximizando su potencial productivo de agroalimentos con bioprocesos, biotecnologías, bioenergías, biomateriales y biocéticos y esto, en el nuevo mundo hacia el que transitamos solo podrá hacerse de la mano de la aplicación de paquetes tecnológicos.

Ante un mundo en crisis que necesita producir alimentos, y al mismo tiempo debe proteger la biosfera y su biodiversidad, es fundamental construir un modelo agroalimentario productivo y sustentable, con soberanía tecnológica y agroalimentaria.

COLONIALISMOS DE AYER Y DE HOY

Seguir produciendo sólo la exportación de materias primas para el crecimiento de los países del norte global, no trae buenos augurios para una región que viene forjada por su contradicción de ser toda una patria grande o varias patrias chicas sumidas a la orden de los grandes capitales extranjeros, siempre influenciados desde los vientos del norte.

Mientras no se pongan en cuestionamiento las bases mismas del sistema productivo extractivista y concentrador, seguiremos abordando los problemas con parches que sólo nos lleven a estirar la agonía, a producir más pobreza y destruir el planeta. Los recursos naturales son motivo de disputa, y Latinoamérica en su conjunto está en la mira desde hace tiempo.

El sur del continente posee recursos más que suficientes para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de sus pueblos, pero esto no llegará si no entablamos nuevas formas de producir: que sean sustentables, que cuiden la biosfera y la biodiversidad, y que, conjugadas con la tecnología y la inclusión de los y las productoras, den respuesta a las demandas de las necesidades de los pueblos. Seremos la patria grande o no seremos, de eso se trata el dilema histórico de la América de San Martín y Bolívar.

FUENTES CONSULTADAS

- Aguilera, L. (2023) Nueva Fase. Trabajo Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del Siglo XXI. Ed. Punto de Encuentro. Argentina.
- Aguilera, L. (Junio 2024) Democracia o libertad: las antinomias de la nueva fase capitalista ¿Qué es lo nuevo de las derechas “alternativas” y por qué suman adhesiones?. Disponible en:<https://www.pagina12.com.ar/744699-democracia-o-libertad-las-antinomias-del-capitalismo-4-0>
- Caciabue, M. y Martinez, S. (Abril 2024). Latinoamérica y las tensiones de Medio Oriente. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/04/latinoamerica-y-las-tensiones-del-medio-oriente/>
- CLAE. (Diciembre 2023). Anuario Internacional. Disponible en: https://estrategia.la/wp-content/uploads/2023/12/Anuario-Internacional-2023_compressed.pdf
- CLAE. (Diciembre 2023). Anuario Latinoamérica y el Caribe. Disponible en: <https://estrategia.la/2023/12/19/anuario-latinoamerica-y-el-caribe-2023/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M (Junio 2024). México: grandes desafíos de un nuevo tiempo. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/mexico/mexico-grandes-desafios-de-un-nuevo-tiempo-20246923230>
- Gimenez, P. y Caciabue, M (Julio 2024). 11J: El uso de redes sociales como parte de una orquesta desestabilizadora contra Cuba. Disponible en <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/cuba/11j-el-uso-de-redes-sociales-como-parte-de-una-orquesta-desestabilizadora-contr-cuba-20247515430>
- Gimenez, P. y Caciabue, M (Junio 2024). Perú en su laberinto: crisis política, causas judiciales y descontento popular. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/peru/peru-en-su-laberinto-crisis-politica-causas-judiciales-y-descontento-popular-20246220514>
- Gimenez, P. y Caciabue, M (Junio 2024). Noviembre decisivo. Las repercusiones regionales de la elección en Estados Unidos. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/06/noviembre-decisivo-las-repercusiones-regionales-de-la-eleccion-en-estados-unidos-por-paula-gimenez-y-matias-caciabue/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M (Mayo 2024). Panamá: ¿Mulino al Gobierno, Martinelli al poder?. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/panama/panama-mulino-al-gobierno-martinelli-al-poder--2024513056>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Mayo 2024). México tendrá presidenta. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/mexico/mexico-tendra-presidenta-20245250559>

FUENTES CONSULTADAS

- Gimenez, P. y Martinez, S. (Mayo 2024). Escenario electoral en República Dominicana: posible continuidad y los temas pendientes. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/05/escenario-electoral-en-republica-dominicana-posible-continuidad-y-los-temas-pendientes-por-paula-gimenez-y-solange-martinez/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Abril 2024). Venezuela responde al bloqueo internacional con democracia participativa. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/opinion/venezuela/venezuela-responde-al-bloqueo-internacional-con-democracia-participativa-20244290534>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Abril 2024). México: AMLO y los desafíos de una probable continuidad. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/mexico/mexico-amlo-y-los-desafios-de-una-probable-continuidad-2024410535>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Abril 2024). Los delegados del Comando Sur en América Latina. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/opinion/estados-unidos/los-delegados-del-comando-sur-en-america-latina-2024412052>
- Gimenez, P. (Marzo 2024). América Latina: nuevas formas de dictadura obligan a resignificar y reinventar la democracia. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/03/america-latina-nuevas-formas-de-dictadura-obligan-a-resignificar-y-reinventar-la-democracia-por-paula-gimenez/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Marzo 2024). Haití, entre la espada y la pared. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/opinion/haiti/haiti-entre-la-espada-y-la-pared-20243180514>
- Gimenez, P. (Marzo 2024). América Latina en el paro internacional: los feminismos populares ocupan las calles en defensa de sus conquistas. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/03/america-latina-en-el-paro-internacional-los-feminismos-populares-ocupan-las-calles-en-defensa-de-sus-conquistas-por-paula-gimenez/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Febrero 2024). Nayib Bukele: “El candidato de la seguridad”, busca la reelección. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/02/nayib-bukele-el-candidato-de-la-seguridad-busca-la-reeleccion-por-paula-gimenez-y-matias-caciabue/>
- Gimenez, P. y Montoya, J. (Febrero 2024). Venezuela vota este año bajo fuertes presiones externas. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/02/venezuela-vota-este-ano-bajo-fuertes-presiones-externas-por-paula-gimenez-y-jimena-montoya/>
- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Enero 2024). Ecuador: el crimen transnacional y el problema de fondo. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/internacionales/ecuador/ecuador-el-crimen-transnacional-y-el-problema-de-fondo-20241190544>

FUENTES CONSULTADAS

- Gimenez, P. y Caciabue, M. (Enero 2024). Necesidad y urgencia de integración y unidad regional. Disponible en: <https://www.eldestapeweb.com/opinion/america-latina-y-el-caribe/america-latina-y-el-caribe-necesidad-y-urgencia-de-integracion-estrategica-y-unidad-continental--20241423440>
- Martinez, S. (Febrero 2024). Lula da Silva: persona grata para los pueblos del mundo. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/02/lula-da-silva-persona-grata-para-los-pueblos-del-mundo-por-solange-martinez/>
- Martinez, S. (Mayo 2024). Elecciones en Panamá: siete candidatos con la mira puesta en la migración, los paraísos fiscales y las leyes mineras. Disponible en: <https://www.nodal.am/2024/05/elecciones-en-panama-siete-candidatos-con-la-mira-puesta-en-la-migracion-los-paraisos-fiscales-y-las-leyes-mineras-por-solange-martinez/>



www.nodal.am



www.clae-fila.org



Directora de NODAL
MG. PAULA GIMÉNEZ

Director de CLAE
MG. ARAM AHARONIAN

Director de investigación
MG. LUCAS AGUILERA

Directores de CLAE ARGENTINA
ESP. MATÍAS CACIABUE
MG. EMILIA TRABUCCO

Equipo Editorial:
ELISA GARCÍA, SOLANGE MARTÍNEZ, JIMENA MONTOYA, LUCIANA JOULI

Con la colaboración de:
CEA AGRO (Centro de Estudios Agrarios)
OECyT (Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología)
OITRAF (Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro)
CEFOPED (Centro de Estudios y Formación en Políticas Educativas)
CEFEM (Centro de Estudios Feministas)



Fecha de Publicación: 09 de Julio de 2024